

Ludolfo Paramio

La derecha en transición

La idea que se pretende desarrollar en esta nota es que, tras más de un cuarto de siglo, la ideología de la derecha ha alcanzado un punto de inflexión, que se refleja en la dificultad de ganar elecciones afirmando tajantemente sus principios, pero también, en el caso europeo, en la evolución hacia un mayor pragmatismo de sus políticas. Este pragmatismo se traduciría en una aproximación hacia el centro de los políticos conservadores.

Desde la primera presidencia de Reagan en Estados Unidos el clima ideológico del mundo ha estado marcado por la ofensiva primero y la hegemonía después de una nueva derecha cuyos principales rasgos eran la confianza y el optimismo sobre sus propias posibilidades. Aunque es muy posible, como ha señalado un reciente biógrafo, que esos rasgos fueran desde el comienzo una aportación de la personalidad de Ronald Reagan, el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética los reforzaron decisivamente.

A comienzos de los años noventa se podía pensar que ya no existían alternativas a la democracia liberal y a la economía de mercado: la historia, en el sentido hegeliano, había llegado a su fin. Ese optimismo, sin embargo, llevaba a conclusiones exageradas y un tanto peligrosas, por ejemplo, la de que los problemas sociales podían resolverse abandonando cualquier intento de intervención pública y dejando que el mercado se encargara de ellos. En América Latina esa era la ideología que acompañaba a la generalización del Consenso de Washington.

La crisis económica del cambio de siglo mostró que el coste de las reformas neoliberales podía hacerse insostenible en sociedades muy desiguales si el crecimiento económico se estancaba o retrocedía. El profundo malestar social contra los políticos y gobernantes identificados con el consenso neoliberal provocó en varios países de la región el ascenso de movimientos "neopopulistas", quebrando así la sencilla visión del futuro de los ideólogos de la nueva derecha. Hoy sólo los gobiernos de México, El Salvador y Colombia se identifican sin demasiados matices con esa perspectiva.

Pero quizá la idea más peligrosa, implícita en la confianza de la nueva derecha sobre sus propias posibilidades, era la de que el mundo se podía rediseñar eliminando los últimos bastiones del totalitarismo y del estatalismo económico. Conviene subrayar que no se trata de poner en cuestión el objetivo último de esta ambición. Extender la democracia y el respeto de los derechos humanos a todo el mundo sería un avance realmente histórico, y pocos dudan de que la desaparición de los estatalismos totalitarios, las teocracias autoritarias o las dictaduras y cleptocracias del mundo subdesarrollado sería muy deseable.

El problema es que esa idea conlleva dos premisas tan discutibles como peligrosas. La primera es la de que la democracia es la forma espontánea de organización política de una sociedad, más allá de sus complejidades o desigualdades internas. La segunda es la de que la fuerza puede ser legítima para dismantelar los regímenes opresores, contando con que la desaparición de éstos conducirá automáticamente, en virtud de la primera premisa, a la aparición de gobiernos democráticos y respetuosos de los derechos humanos.

La afirmación de la fuerza

La idea de que se podía recurrir a la fuerza militar, por encima de la legalidad y de la diplomacia, para crear un orden internacional acorde con los valores occidentales, alcanzó su cenit con la guerra de Irak. Esta idea estaba presente desde el comienzo del auge de la nueva derecha, pero se

mantuvo dentro de unos límites aceptables hasta que la camarilla neocon del segundo presidente Bush decidió manipular los sentimientos nacionales de agravio tras el 11-S para desencadenar una guerra preventiva contra Saddam Hussein.

En las invasiones de Granada (1983) y de Panamá (1989) impulsadas por Reagan y Bush padre, respectivamente, se podía argumentar que se trataba de desalojar a gobernantes ilegítimos y violentos, que la mayoría de la población de ambos países estaría de acuerdo con ello y, sobre todo, que el costo en vidas humanas de ambas operaciones sería limitado. Mucho más discutible fue la guerra de desgaste contra los sandinistas, dado que el instrumento utilizado, la contra, fue responsable de crueles violaciones de los derechos humanos, como se podía esperar de la trayectoria de sus dirigentes, y que se trató de una guerra encubierta, sin control del Congreso de Estados Unidos.

El éxito de estas operaciones, y su costo limitado, sirvieron en todo caso para fortalecer la idea de que la fuerza no sólo podía ser necesaria en ocasiones, sino que era bueno afirmar su papel frente a las obsesiones "pacifistas" y "legalistas" tan extendidas en Europa. Dos hechos fundamentales, al menos, hicieron que la izquierda norteamericana y europea se sintiera a la defensiva en este terreno.

El primero fue el despliegue de los euromisiles, frente a la modernización de los cohetes de alcance intermedio del Pacto de Varsovia en los últimos años de Breznev. Pese a que la decisión de la OTAN de instalar los misiles Pershing y Cruise tenía una gran racionalidad, el temor a que dieran origen a una escalada militar llevó a amplios sectores de la izquierda europea a oponerse a ella. La llegada de Gorbachov y su decisión de poner fin a la carrera de armamentos, y la audacia paralela de Reagan en su encuentro a solas con el dirigente soviético en Ginebra, en 1985, para cerrar esta última etapa de la Guerra Fría, sorprendieron al movimiento pacifista con el paso cambiado, legitimando a posteriori la opción militar de Reagan.

El segundo fue la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990. La agresión irakí pareció demostrar de la forma más cruda que algunos regímenes, más allá de cómo trataran a sus propios súbditos, eran un claro peligro para sus vecinos, y que ante ellos podía ser imprescindible recurrir a la fuerza. Por supuesto que esto era algo que ya habían experimentado los iraníes diez años antes, pero el carácter hostil y oscurantista de la revolución islámica había hecho que la mayor parte de la opinión pública occidental desviara la mirada de aquella guerra de agresión.

El presidente Bush padre se cuidó de respaldarse para la primera guerra del Golfo en la legalidad internacional y en una amplia coalición internacional, lo que dejaba muy poco espacio para objeciones de corte moral. Así comenzó a extenderse un nuevo consenso a favor del uso de la fuerza en situaciones límite, aunque se tratara de guerras en sentido estricto, y no de intervenciones puntuales.

Con la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, durante la segunda presidencia de Clinton, se daría otro paso en la aceptación del uso de la fuerza. No podía haber una decisión del Consejo de Seguridad que respaldara el ataque contra las tropas de Milosevic, a causa del poder de veto de Rusia y su tradicional respaldo al gobierno serbio, pero la guerra contó con un amplio respaldo en la opinión pública. Era evidente, aun así, que el potencial bloqueo de Naciones Unidas ante situaciones que exigieran moralmente una acción armada sentaba un peligroso precedente.

Desde nuestra perspectiva actual lo que más llama la atención de las actuaciones de la Casa Blanca en todo este periodo es su realismo y su cauteloso pragmatismo ante las reacciones de la

opinión pública. Pese a que la primera reacción de Reagan ante el sangriento ataque suicida contra los marines en Beirut, en 1983, fue afirmar que no retiraría las tropas desplegadas en Líbano en misión de paz, pocos meses después comenzó su evacuación. Diez años más tarde, el presidente Clinton haría otro tanto en Somalia, tras los incidentes de Mogadiscio.

El salto cualitativo se produce con la presidencia de George W. Bush, y el desembarco en la Casa Blanca y en el Pentágono de Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Perle, Feith y el resto de la camarilla. La afirmación de la fuerza como recurso se traduce ya no sólo en una arrogante confianza en la posibilidad de utilizarla para rehacer el orden mundial al gusto de los valores occidentales, sino en una clara voluntad de hacerlo a la primera oportunidad.

Saddam Hussein había sido elegido desde el principio como caso ejemplar para la aplicación de esta nueva visión del mundo, y los ataques del 11-S fueron sólo un pretexto para aplicar una estrategia largamente acariciada. Tras la guerra de Afganistán, que aún respondía a la lógica del periodo anterior, la decisión de invadir Irak se impuso manipulando los datos de inteligencia, mintiendo a la opinión pública y presionando, con no mucho éxito, a los países aliados. La primera consecuencia fue la ruptura del consenso que había fundamentado la gran coalición de la primera guerra del Golfo.

Cuatro años después, es bastante evidente que nada salió como los neocon habían planeado, que el futuro de Irak es muy oscuro, y que Oriente Próximo no sólo no ha evolucionado en la dirección deseada, sino que la explosiva situación de Irak ha dado un nuevo protagonismo a Irán, amenazando con un conflicto generalizado entre chiíes y suníes. La democracia no sólo no ha avanzado, sino que el gobierno libanés ha quedado contra las cuerdas por la absurda y cruel ofensiva israelí de julio de 2006. Y el conflicto entre Israel y los palestinos ha llegado a una situación insostenible.

El Departamento de Estado de Condoleezza Rice se esfuerza ahora con más o menos éxito por volver al viejo realismo en política exterior, dando un papel a la diplomacia y a la legalidad internacional, y los países aliados tratan de restañar las heridas abiertas por la invasión de Irak. El desastroso desarrollo de la posguerra ha significado que la confianza en la fuerza y su afirmación como valor se han evaporado, y los países que siguieron a Bush en su aventura buscan deslindarse de ella sin desairar a Washington.

No se trata sólo de que se haya extendido la conciencia de que la guerra de Irak fue una locura de consecuencias dramáticas. Es muy poco imaginable, además, que un político de derecha afirme ahora una voluntad abierta de participar en aventuras militares, o de emprenderlas, aunque sea dentro de la "guerra" contra el terrorismo. La cautela con que se está manejando el conflicto de Darfur, pese a las escandalosas secuelas de sufrimiento humano que le acompañan y a la fuerte presión de amplios sectores cristianos en Estados Unidos para tomar posiciones más duras frente al gobierno de Sudán, da idea de lo que ha cambiado en estos últimos cuatro años.

El consenso neoliberal

La triunfal reaparición en los años ochenta de la economía ortodoxa, etiquetada como "neoliberalismo", debe entenderse en el contexto de los cambios en la economía mundial durante la década anterior. Al igual que la reafirmación de la fuerza militar con Reagan era una respuesta pendular a las humillaciones de Vietnam y de la toma de la embajada de Teherán, el retorno de la economía ortodoxa refleja la búsqueda de alternativas a la gestión económica keynesiana, ya que ésta, como es lógico, había resultado incapaz de resolver los problemas de estancamiento en una situación fuertemente inflacionaria.

Desde la perspectiva ortodoxa, los males de la economía venían de la intervención del Estado, que distorsionaba los mercados e impedía su buen funcionamiento. Frente al habitual relato keynesiano, según el cual la crisis de 1929 había demostrado la necesidad de intervención y justificado las políticas keynesianas, se ofrecía ahora la visión de Milton Friedman, no muy ajustada a los hechos, de que la crisis había alcanzado dimensiones dramáticas tan sólo por una supuesta política monetaria restrictiva de la Reserva Federal.

Hubo varios factores que contribuyeron al renacimiento de las viejas ideas, rebautizadas como nuevas. El primero era, por supuesto, la acumulación de "anomalías" que surgían del intento de seguir aplicando políticas keynesianas a una situación económica inflacionaria, y por tanto "no keynesiana". El segundo era la crítica acumulativa de algunas formulaciones que se veían como representativas de las ideas keynesianas, por ejemplo, la curva de Phillips. Y es muy probable que el tercero fuera el auge del sector financiero, frente a la crisis de la industria, durante los años setenta, a consecuencia de la inyección masiva de petrodólares. El sector financiero sería, a diferencia de la industria, "espontáneamente monetarista".

Pero lo más importante es que las nuevas ideas encontraron respaldo electoral, primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. La explicación de este hecho reside en que lo que para los economistas eran "anomalías" para los ciudadanos eran incertidumbres y desorden crecientes. La sucesión de políticas de expansión y estabilización, en plazos muy cortos, y la conflictividad sindical paralela, condujeron a una fuerte demanda de autoridad y orden.

Thatcher fue la respuesta británica a esa demanda, y el optimismo vital y nacionalista de Reagan su versión para la sociedad de Estados Unidos, desalentada por la emergencia de la "nueva cultura" en los años sesenta, por la división interna en torno a la guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate y la caída de Nixon, todo ello coronado por la humillación de la toma de la embajada de Teherán.

Cuando se recuerdan las crisis económicas y los sobresaltos que acompañaron a estos gobiernos neoconservadores, es inevitable pensar que la llegada de Gorbachov, y la crisis y caída de la Unión Soviética, fueron factores decisivos para el asentamiento de las ideas neoliberales. Pero, a finales de los años ochenta, la larga agonía de la crisis de la deuda en América Latina y el colapso y desintegración del bloque soviético se tradujeron en un nuevo consenso neoliberal en economía, cuya traducción latinoamericana sería el Consenso de Washington, y al que se adherirían con entusiasmo las nuevas democracias de Europa del este.

La crisis asiática de 1997, la bancarrota rusa y la crisis del cambio de siglo supusieron un fuerte desafío al optimismo neoliberal. Pero el clima ideológico entre lo que podríamos llamar "economistas globales" no cambió demasiado, gracias al estancamiento de las economías europeas. La muy desfavorable comparación entre el crecimiento casi nulo en la Unión Europea, con la notable excepción británica, y el rápido crecimiento de la economía en Estados Unidos, parecía ser una demostración inapelable de la superioridad del modelo neoliberal de sociedad, rebautizado como "anglosajón".

Esto ha supuesto una continua presión a favor de una agenda neoliberal de reformas en Europa occidental. De nuevo la excepción era el Reino Unido, por la sencilla razón de que el mercado de trabajo, considerado la clave del modelo anglosajón, está tan liberalizado como en Estados Unidos. Y, en cambio, el gobierno laborista ha ido incrementando las inversiones en sanidad y educación, a la vez que se planteaba una reforma para mejorar el sistema de pensiones, que se ha

convertido en un escándalo por su insuficiencia, en comparación con las economías continentales y en contraste con el alto crecimiento de la economía británica.

En el resto de Europa occidental los gobiernos no sólo se han planteado reformas para flexibilizar el mercado de trabajo, sino que a menudo lo han hecho a la vez que se subrayaba la necesidad de revisar los sistemas de pensiones para garantizar su continuidad en una situación de prolongación de la esperanza de vida y envejecimiento de la sociedad por el descenso de la natalidad. Y esto a la vez que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento les impedía llevar a cabo políticas anticíclicas para crear empleo.

En un escenario de crecimiento del desempleo, hasta niveles muy altos para las sociedades de la Europa desarrollada, las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones se han vivido, lógicamente, como amenazas graves para el futuro de muchas familias. Ciertamente menos graves que en otras sociedades con menores niveles de riqueza y que no han conocido nada equivalente al Estado de bienestar de la Europa continental, pero aún así muy inquietantes. La incertidumbre sobre el futuro ha creado así un fuerte descontento de los ciudadanos frente a los gobiernos. Este descontento se ha relacionado con la globalización de la economía. En el caso de Estados Unidos las importaciones de Asia, y en particular de China, se han convertido en el símbolo de la amenaza externa a los puestos de trabajo en la industria, pese a la buena evolución del empleo. En Europa, en cambio, las deslocalizaciones hacia Asia y Europa del este, y no ya las importaciones, se perciben como la principal causa de la pérdida de empleo industrial. En los años pasados, en los que la economía de Europa occidental no crecía, y el paro aumentaba, esa percepción se ha traducido en resistencia contra la ampliación de la Unión Europea, lo que contribuyó al rechazo del proyecto de Constitución de la UE en Francia y Holanda.

Más allá de las consecuencias electorales, este clima ha llevado a los gobiernos a tratar de reformar las economías sin llegar a confrontaciones duras con los sindicatos y la sociedad en general. El ánimo beligerante que caracterizó a Margaret Thatcher es hoy poco imaginable en ningún gobierno (conservador) de Europa occidental. La dificultad de formar gobierno con un programa de confrontación social, por razones de aritmética parlamentaria, es sólo una parte del problema. El presidente Chirac, con una amplia mayoría favorable en el Parlamento, no quiso dar continuidad a los intentos de reformas que provocaron mayor contestación social durante su mandato.

¿Hacia el centro?

Durante el último año se ha producido un hecho muy importante: la economía europea ha vuelto a crecer, y a hacerlo por encima de la economía norteamericana. Los economistas lo explican, en parte, como efecto acumulado de las reformas graduales que los gobiernos han llevado a cabo en años anteriores, y que en su momento fueron vistas como insuficientes. Es bastante probable que esta explicación contribuya a que los gobernantes prefieran seguir en lo sucesivo esa misma línea de reformas graduales y en lo posible pactadas con los agentes sociales, y que descarten un "big bang" de reformas al precio de un fuerte enfrentamiento social.

El caso más evidente es el alemán. Schröder hizo reformas costosas e impopulares, y Merkel ha buscado negociar nuevas reformas, especialmente la de la sanidad. En el nuevo clima de optimismo económico, esa vía gradual puede ser más fácilmente transitable y contribuir a reforzar el optimismo. Lo esperable es, por tanto, que mientras el SPD sigue asumiendo el desgaste político por las reformas anteriores, Merkel vea aumentar su popularidad. Y si los

socialdemócratas abandonan el gobierno de coalición, es probable que la democracia cristiana de Merkel obtenga amplio respaldo en unas nuevas elecciones.

La gran incógnita en el actual contexto europeo es la Francia del presidente Sarkozy. Con muy buen sentido político, ha pospuesto las reformas que afectan a las relaciones laborales a fechas posteriores a las elecciones legislativas de junio, ha pedido a los sindicatos un acuerdo sobre estas reformas, y ha nombrado a personalidades de izquierda y de centro en su gobierno.

Su idea puede ser cargarse de razón y revalidar su mayoría parlamentaria antes de pensar en una confrontación social, que se pospondría hasta finales de este año. Pero también puede buscar simplemente llegar a la negociación en una situación de fuerza. Ahora bien, incluso suponiendo que Sarkozy se proponga reformas neoliberales de cierta dureza, es muy poco probable que se convierta en nueva referencia para la derecha europea, dada su posición internacional proteccionista y antiliberal.

Quizá es significativo que los conservadores suecos hayan ganado las elecciones de septiembre de 2006 con un programa liberalizador pero muy centrista. O que el nuevo líder conservador británico, David Cameron, esté llevando a su partido hacia el centro e incluso, en algunos casos, a desbordar la agenda social del gobierno laborista. Se podría pensar que, tras años de retórica neoliberal sin buenos resultados electorales ni grandes éxitos en la gestión del gobierno, la derecha europea está aproximándose a un nuevo consenso centrista.

La paradoja es que esta evolución no sería consecuencia de una nueva fuerza ideológica o política de la izquierda, sino de la esperable resistencia social ante reformas demasiado audaces, cuyos supuestos beneficios se verían en el futuro pero cuyos costes deberían asumirse de inmediato. Desaparecidas las urgencias de los años de estancamiento, y vistas las posibilidades de éxito de las reformas pactadas y no traumáticas, la derecha puede estar asumiendo de nuevo el modelo social europeo como propio, al igual que lo hizo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. n

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1400&id_rubrique=581

Piero Meaglia y Ermanno Vitale

La revuelta antipolítica

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1398&id_rubrique=580

I

Ya en 1967 Rokkan y Lipset observaron que había comenzado el "descongelamiento" del sistema de partidos que había gobernado, alternándose en el gobierno, la mayor parte de los países europeos desde los años veinte.¹ Al interrumpirse el largo ciclo de crecimiento económico comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, parece terminar también un ciclo político iniciado después de la primera, y por ende todavía más antiguo. Nuevas organizaciones políticas irrumpen de improviso en una escena que parecía inmutable. Primero se trata de grupos políticos de extrema izquierda. Pero su vida será breve. Más sólidas se mostrarán las nuevas derechas, sobre las cuales un reciente libro de Alfio Mastropaolo² nos ofrece varias informaciones y algunos puntos de reflexión. En 1972 nace en Dinamarca el Fremskridtspartiet, es decir, el Partido del Progreso, promotor de la protesta contra el fisco, y en 1973 en Noruega el Partido de Anders Lange, que pide la reducción de los impuestos, de las contribuciones sociales y de la

intervención pública. En 1972, en Francia, Jean-Marie Le Pen fundaba el Frente Nacional, nacionalista, tradicionalista, autoritario. En Bélgica en 1978 es creado el Vlams Blok. En Alemania en 1969 la Nationaldemokratische Partei Deutschlands alcanzaba el 5% de la votación, el umbral de acceso al Bundestag; en 1972 surgía la Volkunion y en 1983 sería la ocasión de los Republikaner. En Gran Bretaña, de una escisión del National Front, racista y parafascista, se forma en 1980 el British National Party.

Con los años, la "familia" crece y gran parte de sus nuevos miembros tiene éxito. En 1986 en Austria, Jörg Haider imprime un viraje hacia la derecha al viejo Partido Liberal y en 1999 participa en el gobierno con el Partido Popular. En Suiza, donde han prosperado la Liga de los Ticinesi y el Partido de los Automovilistas, nacido en 1985, y después rebautizado Partido de la Libertad, xenófobo, antifiscal, antipolítico, a mitad de los años noventa el rico empresario Christof Blocher renueva la Schweizerische Volkspartei/Unión Democrática, haciéndole asumir posiciones antieuropeístas, nacionalistas, securitarias, liberistas y racistas: en 2003 ese partido alcanza el 27% de los votos.

En los años noventa, en Portugal, bajo la guía de Paulo Portas, el viejo Centro Democrático Social- Partido Popular padece una mutación análoga. En Dinamarca el Dansk Folkeparti de Pia Kjaersgaard, intolerante hacia los extranjeros y favorable a un welfare state sólo para los nativos, obtiene en 2001 el 13% de los sufragios. En Alemania la Partei Rechtsstaaylicher Offensive entra en 2001 a ser parte del gobierno regional de Hamburgo. En Holanda el Centrum Democraten de Pim Fortuyn conquista en marzo de 2002 un tercio de los escaños del Consejo Municipal de Rotterdam y dos meses más tarde, después del asesinato del propio líder, con la fuerza del 17% de los votos ganados en las elecciones nacionales entra en un gobierno de centro derecha.

En Gran Bretaña el United Kingdom Independence Party obtiene un inesperado éxito en las elecciones europeas con el 16% de las adhesiones, cuatro menos que los laboristas y uno más que los liberales. Por último, en Italia, considerando la Lega Nord, Forza Italia y Alleanza Nazionale, partidos todos de "nueva derecha", se puede afirmar que éste es el primer país europeo en que se ha formado un gobierno compuesto predominantemente por nuevos partidos.

¿Pero es apropiado definir de "derecha" a todas estas nuevas fuerzas? Algunas se definen como tales, pero otras no, y se llaman, por ejemplo, liberales en Austria, populares en Portugal, partidos del progreso en Escandinavia. Es mejor examinar sus programas, donde se captan las muchas semejanzas pero también alguna diferencia. En el plano cultural, las nuevas derechas son "conservadoras" y revalorizan la familia, la religión, la patria, la nación, en ocasiones el Estado, e intentan defender una verdadera o presunta identidad nacional de su disolución en la unidad europea. En el plano económico, algunas son netamente liberistas, otras no desdeñan la protección del welfare state, de la cual, sin embargo, querrían excluir a los inmigrados, y otras veces categorías débiles, como madres solteras, toxicodependientes y homosexuales. Estos caracteres permiten distinguir la nueva derecha de la más antigua, es decir, de los partidos liberales y conservadores europeos: en el plano cultural y de las costumbres las nuevas derechas son más regresivas que las tradicionales, las cuales han terminado por tolerar una sociedad más bien permisiva, mientras que en el plano económico no son todas ni del todo favorables al mercado como en cambio son las tradicionales, hoy en día totalmente liberistas.

A primera vista estas posiciones permiten definir, sin más, como de "derecha" a los partidos de los que se acaba de ofrecer un elenco sumario. Se podría preguntar sin embargo: ¿con base en cuál criterio? ¿Según cuáles criterios distinguimos la derecha de la izquierda y la nueva derecha

de las tradicionales? El punto merece atención. De hecho, dos entre las más comunes definiciones de la nueva derecha, la que las juzga derechas "extremas" si no fascistas y la que las considera una manifestación de populismo, son tal vez demasiado precipitadas o al menos no del todo pertinentes. A las nuevas derechas les faltan algunos rasgos esenciales del fascismo que ha devastado Europa entre la primera y la segunda guerras mundiales: el nacionalismo agresivo, la sumisión de la esfera privada a la pública, la supremacía del Estado respecto de la sociedad y el mercado. Y falta el racismo abiertamente profesado por el nazismo. Lo inmigrantes se ven a menudo considerados también ellos como víctimas de las insensatas políticas de inmigración de los gobiernos, que permiten a los flujos migratorios perturbar tanto los países de partida como los de arribo. En fin, las nuevas derechas se han sustraído del aislamiento en el que habían caído por decenios las derechas extremas de la posguerra, e incluso se podría observar que las derechas fascistas de la preguerra en su tiempo no han permanecido, por cierto, tan "aisladas", más bien, por el contrario, conquistaron el poder con la condescendencia de los partidos de la derecha tradicional.

Tampoco la definición de derecha populista resulta convincente. El término populismo es vago y se acostumbra usar con muchos significados diversos. Basta pensar que la coincidencia temporal entre el populismo americano y el ruso es del todo casual. Se podría subrayar, además, que cada estudioso ha construido un concepto de populismo diferente al de los otros, y que no sólo existen derechas sino también izquierdas populistas. Tal vez, procediendo por aproximación empírica, no estaría fuera de lugar caracterizar las nuevas derechas como expresiones de la "revuelta" antipolítica, mezclada diversamente con formas de culto de la personalidad y de plebeyización de la democracia.

De este modo tal vez se logra captar mejor la naturaleza de las nuevas derechas. Pero también antipolítica —podría observarse— es un término polisémico, utilizado para indicar una multiplicidad de fenómenos diversos. Hay muchas antipolíticas. Está la popular y simplista de tantos que afirman no entender la política y la sienten ajena a sus problemas cotidianos. Existen antipolíticas más cultas: las de quienes consideran la política superflua, porque sería mejor dejar que del mercado surja libremente un orden espontáneo; la que quisiera someter la política a los técnicos; las de los fundamentalistas que quisieran someterla a la religión y a sus sacerdotes. Están las retóricas antipolíticas utilizadas para impugnar los partidos tradicionales y las dirigencias políticas. Incluso las asociaciones y movimientos de la llamada sociedad civil han recurrido al discurso antipolítico para exigir mayor transparencia y participación.

¿Qué especie de antipolítica caracteriza entonces a las nuevas derechas? Éstas profesan un fundamentalismo democrático que de hecho se contrapone a la democracia constitucional y representativa. Mediante la democracia constitucional el poder de la mayoría es limitado por un catálogo de derechos y por una distribución de poderes equilibrada. Las nuevas derechas, en cambio, hacen la apología del pueblo soberano, y descuidan o desprecian las reglas con las que el constitucionalismo intenta evitar el abuso del poder. Y, contra las instituciones representativas, predicán la democracia "directa" de los referéndum y exaltan la relación inmediata entre el pueblo y el jefe, la investidura plebiscitaria del líder, el voto como rito de aclamación. Mientras reclaman más democracia, manipulan y "vacían" las instituciones democráticas.

Pero, bajo el perfil del análisis teórico, estas observaciones no son ciertamente satisfactorias, y de por sí no agregan nada a los comentarios más o menos concordes y descontados que se pueden encontrar en la gran prensa europea. Para dar un paso adelante en la comprensión del fenómeno —distinguiendo mejor la derecha de la izquierda y sobre todo las nuevas derechas de

las derechas tradicionales— vale la pena tal vez retroceder y retomar el hilo de la reflexión de Bobbio, tomando en consideración también ensayos precedentes al célebre Derecha e izquierda (1994). Este autor distingue primero la derecha de la izquierda con base en el valor de la igualdad, siendo generalmente la izquierda la parte que lucha por superar las desigualdades económicas y políticas contra la resistencia de la derecha. Y después distingue de varios modos la derecha (y la izquierda) moderada de la derecha (y de la izquierda) radical.

En primer lugar, mientras la derecha moderada ha aceptado actualmente la democracia, la derecha radical es en mayor o menor medida antidemocrática.³ Cuando Bobbio habla de la derecha radical se refiere normalmente a la derecha subversiva, dispuesta a recurrir a la violencia para abatir las instituciones democráticas, y a la cual pertenecerían, por ejemplo, los grupos del terrorismo neofascista italiano. Pero también las "nuevas derechas" amenazan la democracia, si bien de modo diverso y más insidioso: profesando un fundamentalismo democrático que apela al pueblo y a las manifestaciones presuntamente directas de su voluntad, en los hechos contribuyen a la erosión y al "vaciamiento" de los lineamientos de la democracia representativa.

En segundo lugar, para Bobbio la derecha radical reivindica normalmente la tradición, real o inventada.⁴ Pero una de las características de las nuevas derechas es la restauración de los valores tradicionales de la familia, de la religión, de la patria, de la nación: y tal vez, más que de "conservación" se podría hablar de "reacción", de retorno al pasado, como lo hace el propio Bobbio.⁵

En tercer lugar, el valor de la igualdad sirve también para distinguir, además que la izquierda de la derecha, también la derecha radical y más desigualitaria de la moderada. Bobbio afirma que cuando se habla de igualdad y de desigualdad es necesario preguntarse: ¿en qué cosa? ¿Igualdad sólo en derechos políticos o también, en mayor o menor medida, igualdad económica? ¿Igualdad de los puntos de partida o también igualdad en los puntos de llegada? Por ende, ¿cuánta igualdad y cuánta desigualdad? ¿Igualdad y desigualdad en cuántas cosas? El propio Bobbio escribe que la doctrina más igualitaria "puede ser redefinida como la que demanda la igualdad del mayor número de individuos para el mayor número de los bienes".⁶ A la inversa, la derecha radical podría redefinirse como la que quiere menos igualdad que la moderada.

La postura frente a los inmigrantes resulta particularmente significativa. En general, las derechas radicales o nuevas se oponen a la ampliación de los derechos civiles, políticos y sociales a los inmigrantes con mayor dureza que las moderadas o tradicionales.⁷ Frente a la exigencia de equiparar los inmigrantes a los nativos en el disfrute de los beneficios del welfare state, las nuevas derechas se oponen más tenazmente que las tradicionales. En suma, las primeras quieren menos igualdad de cuanto están dispuestas a conceder las segundas.

II

¿Por qué las nuevas derechas europeas han tenido éxito? ¿Por qué han logrado crecer electoralmente, sustraer votos a los partidos tradicionales, y alcanzar en algunos casos incluso el gobierno? Han obtenido consensos en las capas populares pero también en las cultas y acomodadas, han atraído a una parte del electorado de la izquierda pero sobre todo del de los partidos tradicionales de la derecha. ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto?

También a este respecto las dos explicaciones comunes parecen insatisfactorias. La primera subraya el malestar social producido por las transformaciones que acompañan la globalización de la economía, el empobrecimiento de los trabajadores y desocupados, e incluso de una parte de las capas medias, que habría vuelto sensibles a estos estratos a la protesta radical de las nuevas

derechas. La segunda explicación es de carácter cultural: en los países ricos, una vez satisfechas en gran medida las necesidades elementales, la aparición de la sociedad postindustrial habría estimulado el surgimiento de necesidades y valores postmaterialistas, de los que en un primer momento se habrían beneficiado las nuevas izquierdas ecologistas y libertarias, y sucesivamente las nuevas derechas, promotoras de una reacción antimoderna caracterizada por la recuperación de valores tradicionales como la autoridad, la familia, la religión, la comunidad local, la pertenencia nacional. Curiosamente, con base en la primera explicación las condiciones económicas de una gran parte de la sociedad habrían empeorado, con base en la segunda habrían mejorado.

Alfio Mastropaolo propone una tercera explicación, apelando a la vasta "movilización del resentimiento" contra los políticos, los partidos y las instituciones democráticas, contra la incapacidad y la corrupción de la clase política, contra la ineficiencia y la lentitud de los procedimientos y los órganos de la democracia. Pero a su vez la movilización del resentimiento debe ser explicada. ¿Por qué ha sido tan fácil para las nuevas derechas alimentarla y moldearla para su propia ventaja? La razón es que la clase política de los partidos tradicionales, de derecha y de izquierda, no ha sido capaz de reaccionar sobre todo en el plano cultural, no ha sabido o querido defender sus propios valores de la agresión y de la denigración a la que la ha sometido la nueva derecha.

Esta explicación no se refiere sólo a Italia, sino a todos los países en los que las nuevas derechas han crecido a costa de las fuerzas políticas preexistentes. Mastropaolo indica al menos cuatro fenómenos negativos, que los partidos tradicionales no han sabido contrarrestar, abriendo espacio a la nueva derecha: el declive de las pasiones políticas, la deslegitimación de lo público, la clausura oligopólica del mercado político, la difusión de sentimientos antipolíticos.

El declive de las pasiones políticas. En Europa se van reduciendo la participación popular y el interés por la política. Desde los años setenta hasta hoy el abstencionismo electoral se ha duplicado. Disminuyen los militantes de los partidos y de los sindicatos. Crece la insatisfacción frente a la acción de las clases dirigentes. Los medios de comunicación de masas se entregan a la denigración de la política, con la indulgencia de los propios miembros de la clase dirigente. ¿Pero qué han opuesto los partidos tradicionales al debilitamiento de las pasiones políticas? Antes que luchar por invertir la tendencia, han acogido una visión elitista de la democracia que no contempla y que desanima ulteriormente la participación. Para esta visión las elecciones, antes que momentos de agregación y manifestación de las preferencias de los ciudadanos, aparecen como meros instrumentos para seleccionar los liderazgos. Y los partidos, de organizaciones de masa capaces de acoger, socializar, educar a las clases populares, se han transformado en empresas de profesionales de la política y en agencias de promoción de sus carreras.

La deslegitimación de lo público. En los años veinte del siglo pasado Europa fue golpeada por una "gran depresión económica". En los últimos dos o tres decenios ha venido el momento de la "gran depresión política": el Estado ha sido devaluado a favor del mercado. Siempre la intervención pública ha sido condenada como fuente de despilfarros y de ineficiencias, y el mercado ha sido exaltado como remedio. Es el triunfo del "paradigma neoliberal", o mejor tal vez neoliberalista. ¿Pero cómo han reaccionado a esta ofensiva ideológica las fuerzas tradicionales, en particular las de izquierda? Se han rendido sin combatir. Han dejado que se vieran desacreditados términos como "público", "colectivo", "interés general", y que en su lugar triunfaran "mercado", "individualismo" (en el sentido del free riding), "privado", "concurrencia",

"empresa", "flexibilidad", y todo el léxico economicista que actualmente invade todos los aspectos de la vida social y de las instituciones.

La clausura oligopólica del mercado político. En los últimos treinta años los partidos han sufrido una profunda transformación: las ideologías fundacionales han sido gradualmente abandonadas, la participación de la base se ha reducido, el poder se ha concentrado en un grupo restringido de dirigentes. Según Katz y Mair, la última etapa de esta mutación es el "cartel party": los grupos dirigentes de los partidos actualmente casi privados de participación, establemente instalados en los vértices del Estado, acuerdan para repartirse financiamientos públicos crecientes y para obstaculizar el ingreso de nuevas fuerzas en la arena política.⁸ Pero esta involución aisló todavía más a los partidos tradicionales de su base social y electoral, alimentó la desconfianza de los ciudadanos, allanó la vía a la retórica antipolítica de las nuevas derechas. Los partidos tradicionales salieron de ella más vulnerables, más expuestos a la crítica antipartidocrática. Pero también en este caso han estado entre las causas de su propio mal.

La difusión de los sentimientos antipolíticos. Paradójicamente, los miembros mismos de la clase dirigente se han dejado seducir por la antipolítica, copiando sus modos. Ha aparecido, de hecho, también un "populismo de los hombres políticos". Muchos de ellos se han adherido a un outsider, han reivindicado su ajenidad a la política oficial, han ostentado su pertenencia al "pueblo", han adoptado un pretendido lenguaje popular ostentosamente distinto a la "jerga de los profesionales de la política". Han recitado la parte de los tribunos, que descienden entre los ciudadanos comunes y asumen su defensa contra los poderosos. Han llenado los estudios televisivos y se han adecuados al nuevo estilo de los medios: dramatización, espectacularización, personalización de la lucha política. Pero de este modo han vuelto más fácil la marcha de las nuevas derechas, cuyos líderes sin escrúpulos e irresponsables se han mostrado mucho más hábiles —podría casi decirse: darwinianamente más adaptados— para explotar la fuerza ciega de la oleada antipolítica. n

[1] Cfr. S. M. Lipset, S. Rokkan, "Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction", en S. M. Lipset, S. Rokkan (editores), *Party Systems and Voter Alignments*, Free Press, Nueva York, 1967.

[2] Cfr. A. Mastropaolo, *La mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populismo, antipolitica*, Bollatti Boranghieri, Turín, 2005.

[3] N. Bobbio, *Destra e sinistra. Ragione e significati di una distinzione politica*, Donzelli, Roma, 1994, 4ª edición ampliada, 2004, pp. 7-78 y p. 143. Y *Verso la Seconda Repubblica*, Editorial La Stampa, 1997, p. 29.

[4] Cfr. N. Bobbio, *Destra e sinistra*, pp. 101-107.

[5] N. Bobbio, "Per una definizione della destra reazionaria", en *Belfagor*, no. 38, n.1, 31 de enero de 1983, pp. 655-668.

[6] N. Bobbio, "Eguaglianza e egualitarismo" (1978), en *Teoria generale della politica*, a cargo de M. Bovero, Einaudi, Turín, 1999, pp. 248-249; pero también *Destra e sinistra*, op. cit., p.121.

[7] Cfr. N. Bobbio, *Destra e sinistra*, op. cit., pp. 36, 45, 132, 139, 162, 196.

[8] R. S. Katz y P. Mair, "Camping Models of Party Organisation and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party", en *Party Politics*, vol. 1, enero de 1995, n.1, pp. 5-28.

Traducción de Luis Salazar Carrión

Luis Salazar Carrión
¿Por qué ganan?

I

A primera vista, la respuesta es obvia: porque tienen los recursos, porque cuentan con los intereses, porque se apoyan en (y apoyan a) los grandes poderes fácticos del dinero, de los medios y de las iglesias. Porque, fieles a sus principios, imponen lo que según ellas es la ley natural, es decir, la ley del más fuerte. Pero vista con más detenimiento esta respuesta es insatisfactoria a más de maniquea. Pues donde hay democracia, el más fuerte es el que obtiene más votos, y la inmensa mayoría de los electores ni son empresarios ni son fanáticos. Y con alguna frecuencia llevan al gobierno a opciones de izquierda, que con mayor o menor acierto promueven la ley del más débil, la ley que nos iguala pese a todo en dignidad y en derechos. La propia experiencia de la construcción nunca terminada de democracias es la mejor prueba de que se puede derrotar y se ha derrotado históricamente a los defensores de las desigualdades y los privilegios, obligándolos a reconocer y asumir al menos la igualdad política de los ciudadanos, forzándolos a convertirse, aunque sólo sea nominalmente, en derechas democráticas. En derechas que por serlo seguirán defendiendo privilegios, intereses y jerarquías, que seguirán intentando limitar e incluso revertir la igualdad y los derechos, pero que tendrán que hacerlo sometidos al veredicto de las urnas.

Muchos pensadores de izquierda, desde Marx, han tratado de resolver este enigma: ¿por qué la democracia, al menos la democracia representativa, lleva al poder a partidos y movimientos de derecha? ¿Por qué la mayoría electoral no expresa automáticamente la mayoría socioeconómica? Y en este esfuerzo no pocos han terminado por denunciar a la democracia moderna como un mero engaño, como una mera mistificación, apostando por vanguardias iluminadas y tiranos revolucionarios, con los resultados que conocemos. Es la triste historia de las utopías de cabeza, de los mal llamados socialismos reales que en nombre de una mendaz igualdad social impusieron la mayor desigualdad política: la de los regímenes totalitarios. Por eso tendríamos que abandonar las explicaciones simplistas sobre la enajenación y la conciencia de clase, y preguntarnos en serio por qué en un mundo cada vez más salvajemente desigual triunfan las opciones de derecha.

II

Naturalmente las razones son diferentes según la historia y las circunstancias de los países en cuestión. El indiscutible avance de las derechas europeas tiene mucho que ver con las rigideces y hasta perversiones burocráticas de sus Estados de bienestar, pero quizá sobre todo se relacionan con el miedo y la inseguridad que generan los incontenibles flujos migratorios. Sin duda puede asombrar que personajes como Berlusconi en Italia, o políticas tan aventureras como las de Aznar en España, por no hablar de las de los gemelos siniestros en Polonia, mantengan a pesar de sus apretadas derrotas un amplio consenso social y electoral. ¿Cómo puede ser que ni la corrupción del primero, ni las grandes mentiras del segundo, ni el fundamentalismo de los últimos no parezcan suficientes para desprestigiarlos políticamente ante un electorado relativamente informado? ¿Y cómo puede ser que en Francia, el país de la Ilustración, se imponga un discurso tan cargado a la derecha como el de Sarkozy? Seguramente es incorrecto equiparar estos personajes y las fuerzas que encabezan, pero pocas dudas puede haber de que soplan vientos reaccionarios en el Viejo Continente. Vientos que ponen de manifiesto el predominio de las pasiones que siempre han sabido explotar la derechas: el miedo, la incertidumbre, el fatalismo y la xenofobia.

Éstas son también las pasiones que han aprovechado los neocon del gobierno norteamericano para justificar su desastrosa y unilateral guerra contra el terrorismo, que con la ayuda indiscutible del yihadismo islamista, es en buena medida responsable de la derechización del mundo contemporáneo. Una derechización que reivindicando el antagonismo amigo/ enemigo como eje de la política busca aprovechar la polarización generada por las ingentes desigualdades mundiales para legitimar la necesidad de restringir o cancelar los derechos fundamentales de millones de seres humanos, de utilizar las guerras preventivas y de cerrar fronteras para defender a como dé lugar el último gran privilegio de status (como lo denomina Ferrajoli) que reconoce el derecho internacional en nuestros días: el vinculado a la nacionalidad. En nombre de la seguridad nacional, del más rancio y reaccionario nacionalismo se vale todo, incluso desconocer la propia legalidad internacional y sus instituciones, derrocar gobiernos, apresar, torturar y asesinar personas en cualquier territorio, bombardear indiscriminadamente ciudades. No es casual que la inmensa mayoría de las derechas sean hoy nacionalistas e incluso localistas y que pretendan resolver todos los problemas amurallando sus fronteras y declarando guerras por doquier y para cualquier cosa (contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los ilegales, contra toda lo que según su entender amenaza a "sus" ciudadanos).

Nunca se insistirá demasiado en que este lenguaje guerrero, polarizador y crispante siempre ha sido de derecha, es decir, útil para defender los privilegios de los fuertes contra las demandas de los débiles, y que las izquierdas han pagado muy caro cuando se han querido servir de él (con la guerra de clases, por ejemplo). Nada más eficaz políticamente que identificar al enemigo, al causante de todos nuestros miedos y malestares, e identificar simultáneamente un nosotros artificioso para suscitar apoyo, así como la mágica creencia de que todos los problemas se resolverían derrotando y exterminando a ese enemigo. Y nada más incompatible con la democracia bien entendida y con sus precondiciones, es decir, con el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de todos los seres humanos en una perspectiva auténticamente universalista y cosmopolita.

Pero el retorno de este lenguaje bélico y sus señuelos identitarios, a su vez, debe explicarse por el triunfo de un capitalismo salvaje y depredador a nivel global. Un triunfo promovido con irresponsabilidad por los organismos internacionales encargados, supuestamente, del desarrollo económico mundial, que lejos de favorecer el establecimiento de las condiciones institucionales públicas capaces de gobernar y disciplinar los poderes económicos emergentes, parecen haber asumido una visión mercadológica que hubiera desconcertado al propio Adam Smith. Olvidando todas las lecciones históricas de la primera parte del siglo XX, estas instancias y buena parte de los gobiernos decidieron, sin más, que lo público era sinónimo de corrupción y despilfarro, mientras que lo privado lo era de competencia y eficiencia. En este sentido, la derecha tecnocrática, que sólo puede ver a la política y a lo público como fuente de conflictos y desperdicios, abrió el camino para la derecha neoconservadora. Los derechos sociales, base del disfrute auténticamente universal de los derechos de libertad, fueron marginados e incluso ignorados so pretexto de que o eran imposibles o eran indeseables, en la medida en que impedían, obstaculizaban o de plano corrompían la flexibilidad, la eficiencia, la competencia e incluso ¡las libertades individuales!

Este tipo de concepciones se apoyaba sin duda en dificultades inherentes a la forma en que, en ciertos Estados, se habían interpretado burocrática y autoritariamente los derechos sociales y sus garantías, dando lugar a déficit públicos, clientelismo y parasitismo innegables. Pero se basaba también en un diagnóstico simplista según el cual bastaba privatizar, desregular y liberalizar para

lograr un crecimiento económico que en los hechos pronto se convirtió en supersticioso y contraproducente respeto por el equilibrio de las variables macroeconómicas. De esta manera, las recetas neoliberales habrían de profundizar la debilidad de las instituciones públicas frente a los poderes fácticos económicos y sociales agudizando con ello las desigualdades sociales existentes, dando lugar en América Latina y en México a lo que se conoce como malestar creciente en las democracias que al menos en algunos países ya se ha convertido en malestar con la democracia, esto es, a derivas neopopulistas (en sentido político) que amenazan seriamente la vigencia y la sustancia de las propias reglas del juego de la democracia representativa.

III

En varios países de América Latina la polarización socioeconómica y la falta de un crecimiento económico satisfactorio ha generado una verdadera crisis de los partidos tradicionales favoreciendo el surgimiento de liderazgos caudillistas, personalizados, que con retóricas más o menos radicales ponen en cuestión la división y el equilibrio de los poderes públicos estatales. Aun si se presentan como opciones de izquierda, estos liderazgos utilizan estrategias de crispación y confrontación muy similares a los de la llamada nueva derecha europea, mostrando idéntico desprecio por los pesos y contrapesos esenciales del Estado constitucional y por el derecho existente. Pero aquí más bien nos interesa la evolución de las fuerzas derechistas en nuestro país, donde han logrado conquistar y mantenerse en el poder, a pesar de (y quizá en parte gracias a) la aparición de este tipo de liderazgos polarizadores.

En México, como en otras democracias recientes, la transición desde un régimen autoritario se realizó bajo la hegemonía de las concepciones antiestatistas antes mencionadas que, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, se dieron a la tarea de sustituir el modelo económico proteccionista y estatista por uno supuestamente centrado en el mercado. La derecha tecnocrática, habiendo conquistado las instituciones públicas financieras después de la crisis de 1982, habría de imponer un proceso de modernización neoliberal que en los hechos favorecería una agudización sin precedentes de las desigualdades regionales del país, al tiempo que promovería un fortalecimiento oligárquico de grupos económicos cuasi monopolísticos capaces de aprovechar sus relaciones e influencias sobre los encargados de esas instituciones públicas. De esta suerte, la presunta liberalización económica generaría más que una economía de empresarios innovadores, una economía de rentistas oligárquicos que conduciría a la quiebra de buena parte de la mediana y pequeña empresas y a una catastrófica informalización de la economía. Del mismo modo, el mundo laboral se segmentó en tres niveles profundamente desiguales: el de los grandes sindicatos relacionados con las instituciones y empresas públicas o con monopolios privatizados, que mantuvo e incluso incrementó sus privilegios en virtud de su poder corporativo estratégico o sus acuerdos políticos con los gobiernos en turno; el de los trabajadores de la economía formal, que sufrieron un fuerte deterioro económico lo mismo que un sindicalismo casi puramente aparente, a cambio de seguir perteneciendo al sector que ve reconocidos al menos algunos de sus derechos sociales fundamentales, y el inmenso nivel de los que no tenían más alternativa que la economía informal o la emigración hacia Estados Unidos.

De esta forma, en lugar de una economía dinámica y competitiva de emprendedores e innovadores, lo que se obtuvo fue una economía desarticulada, oligopólica, de empresarios rentistas asociados de forma más o menos opaca con una clase política siempre dispuesta a intercambiar favores y lealtades. Y en lugar de una sociedad propiamente civil y organizada se produjo una sociedad segmentada, fragmentada y dominada por hombres y mujeres fuertes, también ellos asociados a esa clase política. Lo que sólo pudo desembocar en un Estado todavía

más debilitado, e incluso pervertido, por poderes fácticos que recorren transversalmente a todos los partidos e instituciones públicas. El viejo corporativismo clientelar lejos de verse desplazado se vio complementado por un nuevo clientelismo en el siempre creciente mundo de la economía informal, generando todo tipo de liderazgos depredadores e irresponsables.

Como consecuencia, tenemos un país dividido en dos mitades social y regionalmente: la de los sectores (y los estados) que mal que bien han podido beneficiarse de la apertura económica o al menos conservar su situación, y la de los sectores (y estados) que se han hundido en una pobreza y marginación creciente. Naturalmente, incluso dentro de estas dos mitades existen también grandes desigualdades, pero parece innegable que esta división aproximada encontró su expresión política en las reñidas elecciones presidenciales del año pasado, en las que la derecha y la izquierda partidistas colorearon el mapa del país de azul o de amarillo, dejando al "centro" priista en un lejano tercer lugar. En este sentido habría que reconocer que dichos comicios representan un verdadero partaguas en la historia electoral del México posrevolucionario: por primera vez la lucha no fue entre el autoritarismo (representado por el PRI) y la democracia (representados por los partidos de oposición), sino entre una opción que se identifica sin dificultad como de centro derecha (el PAN), y otra que no sin fuertes ambigüedades puede definirse como de izquierda (el PRD).

Es de lamentar que esto, que puede interpretarse como un avance para la política nacional y sus partidos, se viera fuertemente degradado por una campaña en que cualquier debate serio fue sustituido por una guerra mediática sin cuartel repleta de insultos, amenazas, ataques personales, filtraciones y vulgaridades que crisparon y polarizaron como nunca la sociedad mexicana en torno no a ideas y programas sino a personas e imágenes publicitarias. En todo caso, en medio de una polarización magnificada y prolongada de forma artificiosa por el candidato perdedor, ganó la derecha representada por Acción Nacional y su abanderado. ¿Cómo entender este triunfo después de un sexenio encabezado por un presidente políticamente analfabeto, lenguaraz, abusivo en su utilización de las instituciones, y que incumplió todas y cada una de sus promesas de campaña? ¿Cómo entenderlo después de un desgobierno que no se explica sólo por nuestro diseño institucional sino por la inmensa incompetencia de un hombre que de manera sistemática hacía el ridículo tanto a nivel nacional como internacional, deteriorando y desprestigiando (todavía más) las instituciones públicas?

Con seguridad la respuesta a estas preguntas pasa por las estrategias retóricas beligerantes y hasta insultantes del candidato perredista, que terminaron por amedrentar no sólo a un buen número de empresarios sino también a amplios sectores de las capas medias e incluso populares. Es poco probable que las metáforas ecuestres del rancho de San Cristóbal hayan sido determinantes en las preferencias de los electores; pero es más que probable que las reacciones airadas y groseras del perredista tuvieran un efecto negativo decisivo para su propia causa. Como suele ocurrir en las contiendas entre nuestros partidos: ganó el que hizo menos autogoles.

Más allá de la anécdota, el PAN y su candidato supieron despertar los reflejos conservadores de una sociedad muy desigual pero que después de tantos años de "revolución institucionalizada" ha aprendido a apreciar la estabilidad y la paz. De una sociedad secularizada que poco o nada se identifica con las posturas clericales y antilaicas de los sectores más extremos de la derecha panista, pero que tampoco lo hace con las minorías radicales que secuestran instituciones, calles y ciudades para obtener prebendas y privilegios. De una sociedad, además, que en forma mayoritaria, según todas las encuestas, considera la inseguridad y la falta de empleo como problemas de mayor prioridad que la propia desigualdad y la pobreza. Se entiende por todo ello

que optara, aunque por escaso margen, por una oferta política de derecha que asume de manera abstracta las banderas de "ley y orden" y de "crecimiento económico" y deja en segundo término los problemas estructurales de la agobiante desigualdad y del desamparo de millones de mexicanos.

Hasta donde puede colegirse por sus primeras acciones de gobierno y por su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón parece sustentarse en un diagnóstico de pura cepa conservadora sobre los problemas de la gobernabilidad que sufre nuestro país, poniendo en el centro de su política una imposible, interminable y peligrosa guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. No porque este desafío no sea crucial, sino porque pretende enfrentarlo "al estilo americano", es decir, utilizando toda la fuerza militar del Estado en un combate frontal más que incierto, aumentando el rigor de las leyes penales e incluso restringiendo o cancelando derechos fundamentales. Después de tantos años de este tipo de retórica bélica ya tendríamos que saber que tales estrategias puramente represivas y prohibicionistas sirven de poco y generan efectos perversos de enorme magnitud.

En el mismo sentido parecen dirigirse las reivindicaciones genéricas del "Estado de derecho", utilizadas como coartada para imponer penas desproporcionadas a minorías ciertamente vandálicas como las de Atenco, mientras se mantiene la impunidad de cuerpos policiacos y gobernadores no menos vandálicos. Curioso "Estado de derecho" que se ensaña con delincuentes menores al tiempo que cobija negocios ilegítimos e ilícitos de empresarios y líderes mafiosos, en un juego de complicidades y apoyos recíprocos. Donde se sentencia con seis años de prisión a una mujer por el delito de dar de comer a unos guatemaltecos ilegales y, en cambio, se utilizan instituciones como la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (¡sic!) para demandar la inconstitucionalidad de una reforma que simplemente despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo así un derecho fundamental de las mujeres. Este uso faccioso, partidista y discrecional de las instituciones públicas es tal vez la peor herencia del viejo régimen autoritario que tanto los gobiernos democráticamente electos de Fox y de Calderón parecen querer mantener (lo mismo, lamentablemente, que los gobiernos "de izquierda" de la capital de la República). Un uso que es a todas luces incompatible con cualquier idea seria de lo que es y debe ser un auténtico Estado de derecho.

Finalmente, hay que señalar como otro de los rasgos distintivos de la derecha panista su total y absoluta voluntad de someterse a los poderes fácticos del dinero, de los medios y de las peores corporaciones sindicales, siguiendo así las más rancias tradiciones priistas de los arreglos opacos y las concesiones discrecionales a cambio de lealtades de corto plazo. Lo que necesariamente se traduce en una visión de las reformas que hacen falta —desde la hacendaria hasta la electoral— que lejos de proponerse la configuración de un verdadero Estado social de derecho capaz de garantizar una efectiva igualdad en derechos, sólo parece buscar asegurar una gobernabilidad que deje intocados los privilegios de los poderes fácticos existentes, es decir, de los más fuertes.

Sería deseable que una izquierda con auténtica visión de Estado utilizara su fuerza electoral para contrapesar y proponer verdaderas alternativas —y no sólo candidatos— al magro e insensible proyecto de nuestra derecha política. Pero más allá de algunas escasas señales en este sentido, lo que parece predominar en nuestra izquierda partidaria es una política miope, caudillista, intransigente en la retórica y profundamente mafiosa en la práctica.

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1401&id_rubrique=582

Roberto Blancarte
La derecha católica

¿El militantismo católico tiene que ser de derecha? ¿Es ineluctable la relación entre la doctrina católica y el conservadurismo político? ¿Hay algo intrínseco en el magisterio pontificio o en las enseñanzas del Evangelio que empujen a la derechización de los católicos? ¿O es sólo un accidente de la historia, que podría ser modificado en el futuro? ¿Tiene capacidad la iglesia católica, entendida no sólo como estructura institucional, sino como comunidad de creyentes, para transformarse y constituir un factor de cambio social? ¿O está condenada a mostrarse contraria a las manifestaciones de la modernidad social y política?

La derecha católica mexicana tiene sus raíces locales, sus conexiones regionales y sus aportes internacionales. Es necesario distinguirlas para reconocer su estructura ideológica, sus posiciones políticas y su modo de operar. Habría que comenzar, sin embargo, por una simple descripción: la derecha católica generalmente sigue, pero a veces también desborda y se contrapone, a la propia estructura eclesiástica. Dicho de otra forma, la derecha católica, en ocasiones, va más allá de los deseos y capacidad de control de la propia jerarquía eclesiástica; aunque siempre haga referencia a un corpus doctrinal, tiene por lo tanto su propia vida y muchas veces su propio proyecto de sociedad, no necesariamente similar al del Vaticano o el episcopado local. Es necesario distinguir estos proyectos y posiciones para entender lo que tienen de estructural.

¿De dónde viene la derecha católica? ¿Cuándo se formó y cuáles son sus características esenciales? La respuesta es relativamente sencilla: lo que hoy podemos llamar "la derecha católica" no es más que la respuesta de la Iglesia a la modernidad, entiéndase ésta como todo aquello que surgió de la Reforma protestante, particularmente la libertad de conciencia y sus consecuencias en el plano religioso, la secularización de las costumbres en el plano social, así como la revolución francesa en el plano político. ¿Pudo haber sido distinto? Es posible, aunque no fue así y no ha sido así, desde León X, en la época de Lutero, hasta Benito XVI, en nuestros días. Para la doctrina católica, por lo menos tal y como fue definida a lo largo de los dos últimos siglos, el origen de todos los males de la sociedad en la que vivimos se encuentra en el surgimiento del protestantismo "que desembocó en una nueva concepción de las relaciones entre Dios y el hombre y en la escisión de la cristiandad".¹ En realidad, la cristiandad siempre había estado escindida, desde los primeros conflictos entre los apóstoles, hasta las luchas contra las diversas disidencias en la Edad Media, pasando por el enorme cisma con el cristianismo de oriente u ortodoxo. Pero es cierto que la nueva concepción entre Dios y el hombre que introduce Lutero va más allá de las razones políticas y de poder religioso que generalmente se escondían detrás de las querellas teológicas anteriores; en este caso, el protestantismo introduce la idea central de que el hombre no necesita de la Iglesia para salvarse, que hay un ministerio universal, mediante el cual todos los seres humanos tienen la capacidad de establecer, gracias a su conciencia, una relación directa con Dios, con la sola guía y ayuda de las Escrituras.

Para la jerarquía católica de los siglos posteriores, el protestantismo no era sino la forma religiosa del individualismo, que conduciría al desarrollo del liberalismo y posteriormente al socialismo y el comunismo. La revolución francesa y sus consecuencias políticas, mediante la introducción del liberalismo en Europa y el resto del mundo, no sería más que un producto de la Reforma luterana, "donde hunde sus raíces ideológicas".² El Renacimiento había dado origen a una nueva concepción del hombre y su lugar en el universo. Las consecuencias de ello se dejarían sentir en todos los aspectos de su actuación en el mundo, comenzando por lo religioso y culminando en lo político. Desde entonces, los pontífices romanos no se han cansado de

condenar la modernidad y sus consecuencias. Pío VI, a quien le tocó la efervescencia de las ideas revolucionarias provenientes de la Ilustración, lo señaló claramente desde su primera encíclica, publicada en la Navidad de 1775, donde denunció "el pernicioso error de `esos desgraciados filósofos que, repitiendo hasta la saciedad que el hombre nace libre y no debe someterse al dominio de nadie, terminaban debilitando los vínculos que unen a los hombres entre sí ".³ Luego entonces, desde muy temprano el conflicto de la Santa Sede con la modernidad se convirtió en la disputa entre la verdad establecida y las nuevas libertades que se estaban estableciendo en el mundo, a lo largo de los últimos siglos; desde la libertad de conciencia, hasta la libertad de las mujeres a decidir sobre lo que sucede en su propio cuerpo.

En todo caso, el punto central a combatir es la idea de que no se reconoce más autoridad que el dominio soberano de la razón y la conciencia individual. Lo anterior explica la condena a las costumbres "inmorales", a la ausencia de valores religiosos en la sociedad que supuestamente limiten los excesos naturales de la población y las campañas de moralización en periodos más recientes. Sin religión no hay moral y sin moral no hay sociedad. Todos los males sociales, desde el liberalismo hasta el comunismo, pasando por la violencia urbana, la disolución de la familia y en consecuencia de las instituciones políticas, tendrían en su base la ausencia de este "freno" religioso y la idea de que el individuo puede discernir por sí mismo lo que es incorrecto de lo que no lo es. En el fondo del pensamiento de la derecha, católica o secular, está la idea que las masas necesitan de la religión para contenerse socialmente; cuestión que por lo demás ha sido constantemente desmentida por los hechos, pues la violencia social, colectiva o individual, jamás ha sido frenada por las creencias religiosas. Al contrario, muchas rebeliones han sido motivadas por concepciones integristas de la vida y las cárceles están llenas de fervientes católicos. Pero eso es algo que la jerarquía católica no ha podido ver. Desde que la modernidad se manifestó a través del liberalismo político, afectando sus intereses institucionales, la Curia romana rechazó cualquier posibilidad de conciliación con los nuevos valores, se atrincheró en el más estrecho conservadurismo y se alineó con las monarquías más retrógradas.

La reacción católica a la modernidad será una de las fuentes esenciales del conservadurismo mexicano, de cuyo tronco saldrá a su vez la derecha católica. En términos teóricos, dicha posición ideológica fue alimentada por los pensadores alemanes que pusieron la ciencia histórica y la filosofía idealista al servicio del dogma, articulando alrededor de dicho cruce la reacción a la modernidad racionalista e ilustrada. Algunos pensadores que influirían de manera preponderante en esta reacción integral-intransigente católica fueron Chateaubriand, Joseph de Maestre, Luis de Bonald y Felicité de Lamennais. Los primeros defendieron la monarquía y el catolicismo como las formas perfectas de la sociedad civil y religiosa y se manifestaron por la defensa del papado y su infalibilidad como claves de la restauración en Europa. Lamennais, aunque se inicia como un pensador tradicionalista, intenta posteriormente mezclar al liberalismo y al catolicismo, acompañado por un grupo de seguidores alrededor de la revista *L'avenir* (El futuro). En ella, Lamennais proponía la ruptura de la alianza entre la iglesia católica y el legitimismo monárquico. En su lugar, pugnaba por "la unión del catolicismo y la libertad", en la cual se encontraría la verdadera salvación del cristianismo. Para poder establecer el principio de orden y autoridad que era el de la religión, Lamennais proponía liberar a la Iglesia "separándola totalmente del Estado", la libertad de conciencia, de culto, la libertad de prensa, la libertad de enseñanza, así como la libertad de asociación intelectual, moral o industrial. ⁴ Pero dicho proyecto es abiertamente condenado por la Santa Sede, a través de las encíclicas *Mirari vos* y *Singulari nos*, concluyendo así de manera estrepitosa y simbólica uno de los primeros intentos (entre muchos que habría después) por adaptar el pensamiento moderno a la doctrina católica o

viceversa.⁵ Uno de ellos, casi simultáneo, es el que avanza en México en 1833 el doctor y sacerdote José María Luis Mora, cuando propone que de la Constitución se elimine "cuanto hay en ella de concordatos y patronatos"; proyecto político que corre con la misma trágica suerte, por lo menos en el corto plazo. Habrá que esperar la llegada de las Leyes de Reforma para que estas medidas se establezcan. Lo mismo sucede en Italia, donde el proyecto de "una Iglesia libre en un Estado libre", del Conde de Cavour, se consolida al mismo tiempo que la unificación nacional.

La pregunta que nos podemos hacer todavía hoy es la siguiente: ¿este fracaso del catolicismo liberal o del liberalismo católico para transformar a la Iglesia era históricamente inevitable? ¿Existe algo en la estructura doctrinal del catolicismo que le impide conciliarse con la modernidad? ¿O estamos simplemente frente a un hecho circunstancial y reversible dentro de las tendencias eclesiásticas? El cuestionamiento podría parecer fútil, dado que en los dos últimos siglos la historia ha estado marcada por la estrecha identidad entre conservadurismo e iglesia católica. Pero tiene sentido si visualizamos la posibilidad de una iglesia católica distinta, no atada inevitablemente a la derecha, porque no hay nada que la ligue intrínseca e ineluctablemente a ella.

La historia, sin embargo, hasta ahora, ha sido la de una Iglesia que, en términos doctrinales y de magisterio pontificio, es decir, la de un catolicismo visto desde Roma y, desde el más estrecho ámbito del Vaticano en los últimos 150 años, no ha hecho más que renegar del mundo moderno y sus productos, en particular los relacionados con las libertades ciudadanas y personales. El ejemplo más acabado de este rechazo es el llamado Syllabus o "Recopilación que contiene los principales errores de nuestro tiempo que están anotados en las alocuciones, encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro Santo Padre el Papa Pío XI", publicado en 1864. El listado de errores incluía las ideas que pugnaban por establecer limitaciones al poder de la Iglesia, por eliminar fueros y privilegios, por establecer el laicismo escolar, generar la separación del Estado y la Iglesia, lograr la separación de las ciencias filosóficas y morales del control eclesiástico, alcanzar la abrogación del poder temporal de la Iglesia y por supuesto aceptar el liberalismo moderno. La Santa Sede condenaba específicamente las ideas que propagaban la necesidad de abolir el catolicismo como religión de Estado y la libertad de cultos, o las que se permitían negar que la libertad de pensamiento conduce a la corrupción de las costumbres. Por si esto fuera poco, el Syllabus condenaba, por último, la todavía hoy para muchos extravagante idea de que "el pontífice romano puede y debe transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna".⁶

La Curia romana no se contentó, sin embargo, con rechazar al mundo moderno. Le opuso un modelo propio de sociedad, que algunos especialistas han catalogado como integral-intransigente y que habría venido conformándose a partir de la pontífice, la defensa de la familia, un ideal de pequeñas comunidades autónomas y descentralizadas alrededor de la imagen de pastor y sus ovejas. En el plano político, este pensamiento proponía una especie de populismo cristiano en contra de los notables, la búsqueda de una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo, una hostilidad contra el orden establecido por la burguesía bienpensante, incluso conservadora, un antiindustrialismo bucólico, anticapitalismo y rasgos permanentes de antisemitismo. No es una coincidencia que en las manifestaciones recientes en México en contra de la despenalización del aborto hayan hecho su aparición grupos con consignas antisemitas. De cualquier manera, todos estos elementos habrían de conformar el pensamiento católico desde finales del siglo XIX y tenderían a formar parte del patrimonio de la derecha confesional, en la medida que el siglo XX avanzaba y las libertades modernas se abrían paso.

En todo caso, lo central del pensamiento intransigente católico era y sigue siendo el rechazo a la modernidad y en particular a su producto más genuino: la libertad de conciencia. Como afirmaba Gregorio XVI: "De esta corruptísima fuente de indiferentismo brota aquella absurda y errónea sentencia, o más bien delirio, de que se debe afirmar y vindicar para cada uno la absoluta libertad de conciencia. Abre camino a este pestilente error aquella plena e inmoderada libertad de opinión que para daño de lo sagrado y profano está tan difundido repitiendo algunos insolentes que aquella libertad de conciencia reporta provecho a la religión".⁷

No es entonces por azar que en el México del siglo XX el proyecto de la Revolución mexicana encontrara su más férreo opositor en la jerarquía católica, de la misma manera que, por lo menos hasta la aplastante derrota en 1867, lo fuera del liberalismo. No es extraño tampoco que la idea de separación entre el Estado y las Iglesias, la libertad de cultos, la libertad de prensa y la libertad de conciencia, defendidas por los liberales mexicanos, fueran condenadas y combatidas por los obispos católicos. Como después la educación laica y las restricciones a la actividad política de la Iglesia, aunadas a una serie de medidas abiertamente anticlericales, enfrentarían desde su establecimiento la abierta oposición eclesiástica católica.

Lo que en México llamamos "la derecha" proviene de esta tradición integral-intransigente de oposición al liberalismo y a la Revolución mexicana. Un caso típico es el de la Unión Nacional de Padres de Familia, fundada en 1917 por el episcopado católico mexicano, para combatir la educación laica. El componente confesional y antimoderno de esta derecha se ve acentuado en la medida que el reconocimiento de las libertades individuales y personales avanza en el país. La "extrema segunda mitad del siglo XIX, como respuesta a la modernidad. La integral-intransigencia es esencialmente un modelo de sociedad que niega la división de esferas entre política y religión y la marginación de ésta a un ámbito específico de lo espiritual, al mismo que enfrenta de manera sistemática a los otros modelos de sociedad surgidos de la modernidad. Los principales elementos de este pensamiento integral-intransigente son el rechazo del individualismo, un organicismo basado en la idea de la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es el derecha" es aquella que, a pesar del paso del tiempo, rechaza cualquier posibilidad de transigir con el mundo moderno y sus consecuencias. Está constituida por aquellos grupos que todavía rechazan la libertad de cultos (por ejemplo, cuando niegan la diversidad religiosa en el país o buscan privilegios para la Iglesia mayoritaria), de prensa (cuando no soporta la crítica y busca acallarla), de expresión (al exigir la censura de películas o exhibiciones artísticas), o de conciencia (cuando se niega el derecho de las personas a decidir de acuerdo a la misma).

La conexión de la derecha católica con la institución eclesiástica y la doctrina puede ser muy variada. La actuación de la derecha en el plano social y político, aunque pueda ser semejante a la del episcopado por la similitud de sus posiciones ideológicas y acciones políticas, se distingue por la variable relación institucional (no es lo mismo ser una orden religiosa, que una asociación laica dentro de la estructura eclesiástica, que una organización de laicos católicos, pero independientes), su interés específico, su independencia organizativa y política frente a la jerarquía y su capacidad de gestión política. En el caso de México esta última característica es muy importante debido a la legislación en materia de religiones que prohíbe específicamente el involucramiento de sacerdotes y ministros de culto en política partidista y electoral. Las organizaciones laicas católicas, que sí pueden actuar en dicho terreno, se convierten en ocasiones en el brazo de la jerarquía eclesiástica para orientar el voto de los ciudadanos o su participación política. Pero hay que distinguir las diferentes propuestas sociales y religiosas, así como las filiaciones de organizaciones tan diversas como el Opus Dei, que es una sociedad de vida

apostólica, de los Legionarios de Cristo, que es una orden religiosa, o Ancifem, que es una organización cívica femenina que se guía por las enseñanzas pontificias, o Provida, que funciona como una organización no gubernamental de laicos católicos.

En las últimas décadas, la Iglesia parece haber aceptado algunas de las cosas que condenaba en el siglo XIX. Por ejemplo, puede aceptar la idea, condenada por el Syllabus, de que "no conviene ya que la religión católica sea considerada como la única religión de Estado, con exclusión de todos los demás cultos". Como acepta la separación entre el Estado y la Iglesia, la libertad de cultos y, relativamente, la necesidad de que la ciencia tenga un espacio de autonomía. Pero en ningún caso la jerarquía católica ha aceptado la absoluta libertad de conciencia y la consecuencia de las libertades modernas. Digamos que el Syllabus no ha sido abolido. De hecho, puede afirmarse que las grandes batallas de la derecha católica en la época actual se dan alrededor de las consecuencias prácticas de la libertad de conciencia: el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre homosexuales y otros temas cruciales en materia de derechos individuales. Podría extrañar que organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia estén más activas en el tema del aborto que en el de la instrucción religiosa en la escuela pública. Pero lo cierto es que el Vaticano ha decidido enfocar sus baterías en cuestiones de moral sexual, desde hace por lo menos tres décadas. Y en el centro de los ataques se encuentra la crítica a la libertad de conciencia, de la misma manera que hace dos siglos. Sólo que ahora lo que se cuestiona es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, de acuerdo a su conciencia; a decidir tomarse una pastilla anticonceptiva, o utilizar la anticoncepción de emergencia o, en casos extremos, a abortar. De la misma manera que se cuestiona el derecho de los jóvenes a usar un condón y a disfrutar de su sexualidad, de manera informada y responsable. O de las parejas del mismo sexo a establecer una relación legal, estable y amorosa.

Para la derecha católica, la libertad sólo puede existir si está mediada por "la" verdad establecida doctrinalmente. La defensa de la vida, de la familia y de las tradiciones no son más que el rechazo de la modernidad y sus consecuencias, particularmente las libertades. Pero el avance de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las minorías hacen que la derecha católica se encuentre cada vez más aislada. Su combate se vuelve entonces más desesperado y se refugia en relaciones de poder, más que en argumentos convincentes. La condena al relativismo moral y al hedonismo, no son más que una nueva manifestación de su rechazo a la libre conciencia.

La diferencia de la derecha católica frente a otras derechas es, entonces, este rechazo a la modernidad y, específicamente, a las libertades modernas, particularmente la libertad de conciencia. Otras derechas seculares, o católicas liberales, no manifiestan ese rechazo a muchas libertades modernas y están dispuestas a aceptarlas, e incluso a defenderlas. Pero la derecha católica, en la medida que basa su rechazo en un discurso doctrinal ahistórico, inmóvil temporalmente, tiene enormes dificultades para aceptar los cambios sociales y políticos.

De esa manera, la derecha católica está condenada a la integral- intransigencia sólo en la medida que sigue atada a un modelo doctrinal y social anquilosado y permanentemente crítico de la modernidad. En la medida que ésta ha fallado como modelo utópico, o ha pasado a una etapa diversa (la posmodernidad), la derecha católica ha podido obtener algunos triunfos. Pero, a menos que se piense en un verdadero retroceso cronológico y político, la derecha católica no representa una real alternativa como modelo social. Por lo mismo, su suerte está atada a la de una doctrina que ha dado pocas muestras de entender los cambios sociales de nuestra época y que por lo mismo tiende a ser marginada de los procesos sociopolíticos.

Por último, también cabría la hipótesis de que si bien la derecha católica ganó la batalla dentro de la institución eclesiástica, fueron los católicos liberales o los liberales católicos los que la ganaron en el marco de la sociedad, no sólo en Francia o en Italia, sino también en México. Después de todo, fueron los liberales católicos o católicos liberales (recordemos que todavía en 1950 el 98% de los mexicanos eran católicos) los que establecieron el Estado laico, la separación entre el Estado y las Iglesias y todas las reformas liberales y laicistas de los últimos dos siglos. Aún hoy siguen siendo mayoritariamente los católicos los que empujan las reformas, por ejemplo, para introducir los anticonceptivos, despenalizar el aborto o aprobar la muerte asistida. Desde esa perspectiva, si bien es cierto que la estructura eclesiástica y la doctrina siguen siendo conservadoras, la feligresía se pasó desde hace tiempo del lado de las libertades. n

[1] Gastón Castella, Historia de los Papas (tomo I). Desde San Pedro hasta la Reforma católica, Espasa- Calpe, Madrid, 1970, p. 282.

[2] *Ibíd.*, tomo II, Desde la Reforma católica hasta León XIII, p. 183.

[3] *Ibíd.*, p. 180.

[4] *Ibíd.*, p. 271.

[5] Algunas ideas al respecto las he desarrollado en Roberto Blancarte, "La influencia de las religiones cristianas", en Guillermo Bonfil Batalla (comp.), Los inmigrantes y su cultura en México, Conaculta-FCE, México, 1993, pp. 517-541, y Roberto Blancarte, "Las fuentes del conservadurismo mexicano", en Renée de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte, Juan Manuel Ramírez Sáiz (comps.), Los rostros del conservadurismo mexicano, Publicaciones de la Casa Chata, México, 2005, pp. 197-206. Ver también Roberto J. Blancarte, "La doctrina social católica ante la democracia moderna", en Roberto Blancarte (coord.), Religión, Iglesias y democracia, La Jornada Ediciones/Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Humanidades- UNAM, México, 1995, pp. 19-58.

[6] Pío IX, "Syllabus", en Encíclicas pontificias. Colección completa de 1832 a 1958, tomo I, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1958, pp. 162-168.

[7] Gregorio XVI, "Epístola encíclica Mirari vos", en Encíclicas pontificias. Colección completa de 1832 a 1958, tomo I, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1958, p. 41.

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1403&id_rubrique=584

Luis Emilio Giménez Cacho y Ciro Murayama

Los ideólogos de los empresarios

Si nos atenemos a la definición de Michelangelo Bovero en el sentido de que quien "afirma 'soy de izquierda' no responde a la pregunta '¿quién eres?', '¿cuál es tu identidad política?' sino a la interrogante '¿en dónde estás respecto a otros, cuál es tu ubicación?' " (nexus, 348) y que, por tanto, ser de izquierda quiere decir tomar una posición, también sería válido analizar y situar a la derecha no por lo que intrínsecamente puede aspirar a ser, sino por sus definiciones ante asuntos específicos. Ya Norberto Bobbio había señalado años atrás (Derecha e izquierda), en aquel tiempo en que se pretendió decretar el fin de las ideologías y el fin de la historia tras la implosión de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de Europa, la vigencia de los términos izquierda y derecha a partir de la manera en que se abordaban los problemas relacionados con la igualdad y la libertad: mientras la izquierda ha puesto mayor énfasis en la igualdad social, la

derecha da preeminencia a la libertad individual. Conjuntando las propuestas de Bobbio y Bovero, entonces, en el terreno de la economía la distinción entre izquierda y derecha puede conducirse a través de la identificación de las posturas que se adoptan frente a los temas de la libertad y la equidad o cohesión social. En términos simples, las propuestas económicas con énfasis en los derechos de los individuos, por ejemplo, privilegiando la libertad de mercado, tendrían correspondencia con una definición más cercana a la inspiración de la derecha, mientras que priorizar los derechos sociales, la equidad entre individuos, caracterizaría a una posición de izquierda en materia económica. La guía anterior, por supuesto, quiere ser eso y no una navaja de corte fino que deje perfectamente delimitadas a ambas corrientes a uno y otro lados, pues resulta obvio que existen múltiples matices: por ejemplo, la socialdemocracia desde hace décadas se ha comprometido con la economía de mercado así como con los derechos políticos individuales al tiempo que, también, distintos partidos liberales de derecha no necesariamente renuncian al mantenimiento del Estado de bienestar.

En nuestro caso, un análisis de la visión y propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el desarrollo del país, permite establecer que para esta importante organización empresarial es a través de la libertad de mercado, así como de la existencia de condiciones para el ejercicio de la libre empresa y su ampliación —por ejemplo, para poder invertir en áreas aún restringidas como la energética— como se solucionará el conjunto de problemas del desarrollo. Para la Coparmex, si bien de forma loable el crecimiento económico es un objetivo sin el cual las demás metas podrán ser incumplidas, no deja de ser llamativo el hecho de que con frecuencia sus propuestas sugieran que el Estado se inhíba para realizar acciones que promuevan el crecimiento y que afecten el ciclo económico en su fase descendente —es decir, aboga para que el Estado no aplique políticas anticíclicas, keynesianas.

Por otra parte, en el discurso empresarial mexicano se han incorporado preocupaciones referidas al tema de la pobreza y de la desigualdad —aunque este último en menor medida—, pero la solución a los mismos y la consecución de la equidad aparecen como una meta secundaria, o bien residual, que se alcanzaría una vez que la economía haya removido otros obstáculos para su buen desempeño. Así, no se llega a entender a la pobreza y a la desigualdad como problemas propios de la economía, que deben resolverse como condición para trascender los límites estructurales que afectan su dinamismo. La tesis que coloquialmente se ha resumido como que primero es necesario agrandar el tamaño del pastel para que, después, cada quien pueda acceder a un trozo mayor, es la que priva en esa visión empresarial.

En general, puede decirse que en lo que se refiere al papel del Estado en la economía, la Coparmex enfatiza la necesidad de que éste salvaguarde los derechos individuales y la libertad de acción para el particular —lo que en buena parte implica un "no hacer" del propio Estado al no intervenir, no interferir, salvo a lo que se refiere, de forma destacada, al asunto de la inseguridad— y relega en el mejor de los casos, aunque casi siempre ignora, el cumplimiento de los derechos sociales —para cuya consecución y ejercicio por parte de los ciudadanos se requiere un Estado que "sí haga", sí intervenga, sí promueva, sí reparta, sí recaude, sí actúe— como fin y como materia a impulsar por las políticas públicas.

Un asunto nodal que no puede soslayarse en la visión de la derecha empresarial mexicana, es su concepto exclusivista sobre los actores que intervienen en las decisiones que afectan al crecimiento económico y las políticas de desarrollo social. El derecho de los trabajadores a participar en el debate económico no forma parte de su horizonte. El arreglo institucional en materia de crecimiento económico sería, en su perspectiva, la consecuencia de un nuevo

acomodo entre los intereses de los particulares y las capacidades de acción del Estado. La empresa, como eje central de articulación de las relaciones económicas entre particulares, sería la clave maestra del crecimiento. El potencial de la economía depende exclusivamente de la libertad con que ésta pueda desenvolverse. La realidad de la institucionalidad económica mundial desmiente ese simplismo en el que por la empresa hablan solamente los empresarios.

Los derechos laborales tienen un reconocimiento prácticamente universal en las democracias modernas. Las convenciones internacionales, desde los convenios de la Organización Internacional del Trabajo hasta los arreglos del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), comprometen al país a reconocer y hacer cumplir los derechos de los trabajadores a la libre sindicalización, a la contratación colectiva y a la huelga. Las economías de la Unión Europea cuentan con Consejos Económicos y Sociales que ofrecen el espacio institucional para el diálogo y la concertación entre los representantes empresariales y de los asalariados. La visión empresarial mexicana excluye a estos últimos de cualquier protagonismo eficaz. La paradoja es que la Coparmex, que ha sido considerada por muchos años la voz dominante de los empresarios, ocupa un puesto en el escenario de los debates económicos gracias, precisamente, a su estatuto de ser el único sindicato patronal bajo las reglas de la Ley Federal del Trabajo.

En el análisis que ahora ofrecemos sobre las definiciones de la Coparmex, el material base que se utiliza es el documento Propuestas 2000-2010, que la confederación preparó al inicio de la década en curso, siguiendo ejercicios que había elaborado con antelación para los sexenios 1988 a 1994 y de 1994 a 2000. Las propuestas de la Coparmex se inscriben en el objetivo de ofrecer una visión de largo plazo para México, que abarque los decenios 2010, 2020 y 2030. Como se podrá ver en las líneas que siguen, buena parte de las preocupaciones y sugerencias de esta organización empresarial han sido recogidas durante las dos administraciones federales del Partido Acción Nacional —y otras venían siendo incorporadas al diseño institucional y de políticas puestas en marcha en México dentro de las coordenadas del Consenso de Washington por los gobiernos de corte neoliberal en el país, de 1982 a la fecha— pero también han logrado crear un cierto "sentido común" en nuestra sociedad y, en particular, en sus elites políticas e intelectuales acerca de cómo debe conducirse la economía, cuáles deben ser sus prioridades e instrumentos de actuación. Esta reflexión se realiza de cara a ese "consenso" que en buena medida se amolda al statu quo existente, y que hace un balance positivo de los resultados de la economía mexicana instalada ya por demasiado tiempo en lo que Rolando Cordera ha definido como el "estancamiento estabilizador", y que en nuestro caso está dando lugar a una versión vernácula de la "cultura de la satisfacción" de unos pocos a que se refirió John Kenneth Galbraith para llamar la atención sobre la escasa aversión a la desigualdad en la sociedad estadounidense.

Las propuestas de la Coparmex, en gran parte referidas al campo de la economía, trascienden esa esfera, tocando áreas como la educación y el sistema político que aquí se analizarán de manera sucinta pues, al final, esas definiciones también son útiles para comprender el perfil ideológico de la más relevante agrupación empresarial mexicana.

El Banco de México: Guardián de los precios, no del crecimiento

La estabilidad macroeconómica permanente es la condición prioritaria que, para la Coparmex, ha de cumplirse para que sean factibles el crecimiento y la generación de empleos. En consecuencia, propone "Plena autonomía al Banco de México en materia de política monetaria y cambiaria, con la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios y el poder adquisitivo de la moneda, mediante mecanismos del propio mercado", así como el "establecimiento de metas multianuales

de inflación similares a la de nuestros principales socios comerciales con un rango de tolerancia no mayor a más/menos dos puntos porcentuales". Al respecto, cabe señalar que desde abril de 1994 la Constitución establece que el Banco de México goza de autonomía, misma que, de acuerdo con la propia autoridad monetaria, "implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación". Esto es, puede afirmarse que por disposición constitucional en México la política monetaria está "blindada" frente a decisiones políticas, del poder ejecutivo o legislativo, que le impelan, por ejemplo, a emitir moneda para extender el circulante y la demanda agregada en la economía con riesgos inflacionarios. Pero en el mundo existe más de un modelo de autonomía para la banca central. En nuestro caso la Constitución no especifica —como tampoco aparece en las definiciones de la Coparmex— que el Banco de México tenga la responsabilidad de procurar el crecimiento económico o la creación de empleos, como sí ocurre con el mandato de la Reserva Federal en Estados Unidos. En México, entonces, hay un diseño institucional que atiende a las preocupaciones referidas al control de precios pero no al crecimiento, es decir, que pone énfasis en la estabilidad macroeconómica nominal soslayando la estabilidad macroeconómica real.

Impuestos: Pocos y parejos

La debilidad de la carga tributaria mexicana (apenas 10.2% del PIB), así como la volatilidad de los ingresos públicos (alta dependencia de los ingresos petroleros) no figuran en el diagnóstico de la Coparmex, aunque sí presenta propuestas en materia de recaudación fiscal. Propone, en concreto, "un nuevo sistema [fiscal] que sea general, es decir, parejo para todos", "un sistema con pocos y bajos impuestos". Un tratamiento, parejo para todos, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, implica que el ingreso disponible —después de impuestos— de los individuos crezca pero, a la vez, que las posibilidades de acción redistributiva por parte del Estado disminuyan. En un país con la enorme concentración del ingreso que tiene México, dar un trato igual a sujetos desiguales se convierte en una política regresiva, contraria a la equidad. Y en efecto, la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta ha caído por acuerdo del Congreso. La Coparmex insiste, además, en la eliminación "de la tasa cero de IVA a las medicinas".

Acompañando la definición para mantener bajos los impuestos, la Coparmex sostenía desde el 2000 la necesidad de "establecer el compromiso legal de que el déficit del sector público no deberá exceder el 1% del PIB en los próximos 10 años". En 2006, la aspiración de legislar contra políticas anticíclicas por el lado del gasto se traduciría en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pensiones: Un asunto individual

Los esquemas de solidaridad intergeneracional —donde los trabajadores en activo contribuyen a los ingresos de los retirados— e intrageneracional —hay transferencia de recursos de los trabajadores que mayores remuneraciones recibieron durante su vida activa hacia los de menor nivel—, que estructuraron el diseño de los sistemas de pensiones de los Estados de bienestar en los países industrializados, tienden a ser sustituidos por sistemas de cuentas individualizadas, donde el componente solidario se ve disminuido y, con ello, los objetivos de equidad y cohesión social.

La Coparmex propone "para integrar al mayor número de trabajadores a los sistemas de ahorro para el retiro, reforzar los esquemas existentes para los trabajadores al servicio de los gobiernos federal y estatales, incorporándolos a sistemas de cuentas individualizadas", así como "crear

sistemas de ahorro para el retiro con fondos libres con tratamiento fiscal favorable a largo plazo" —con lo cual, los trabajadores de mayores ingresos, por ejemplo, podrían depositar parte de sus rentas en estos fondos y, a través de esa vía, exentar el pago de impuestos—. La agenda de la Coparmex en materia de pensiones va teniendo éxito, como lo demuestra la reciente aprobación de la nueva ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El gasto en educación

La Coparmex señala que "hay que subsidiar la demanda" y no a las escuelas, es decir, propone "los `bonos' educativos a los que tendrían derecho los padres de familia... lo que permitiría a los estudiantes elegir la institución, pública o privada, en la que desean estudiar...". Economistas como Joseph Stiglitz (La economía del sector público, Antoni Bosch, Barcelona, 1992) han señalado las consecuencias en términos de equidad de una medida como ésta: se crearía una sociedad aún más estratificada. Las escuelas de las zonas de mayores ingresos, que de por sí pueden tener un mejor desempeño escolar, concentrarían más recursos, en detrimento de las ubicadas en áreas o barrios pobres que se verían castigadas en su financiamiento.

A la par, la Coparmex propone "cesar la diferenciación entre educación pública y particular, estableciendo que ambas son de interés general de la nación y se necesita promoverlas a fin de que la calidad y la cobertura se supere en ambas", es decir, hacer susceptibles de financiamiento público a las escuelas particulares.

Para la enseñanza pública la Coparmex propone "convertir las escuelas oficiales, en los sectores de niveles socioeconómicos medios, en escuelas administradas por cooperativas de maestros sostenidas con la cooperación de los padres de familia, con un subsidio gubernamental decreciente".

La educación y el Estado

En las propuestas de la Coparmex hay evidentes puntos de contacto con la agenda de la iglesia católica, por ejemplo, en lo que se refiere a la (inadecuada desde su perspectiva) laicidad de la educación. La organización patronal establece que "quizá la más trágica de las pérdidas que sufrió la escuela en México consiste en que durante décadas el concepto de educación laica se interpretó como una exclusión sistemática de toda referencia ética y de valores de formación de los estudiantes". Por ello, propone "incorporar al artículo tercero constitucional el derecho de los padres de familia a decidir el tipo de educación que reciban sus hijos", como si los hijos fuesen una propiedad de los paterfamilias y no sujetos con derechos inalienables, como el que consagra el recibir obligatoriamente una educación basada en criterios científicos, ajena al fanatismo, como establece hoy la Constitución.

El mundo del trabajo

Las propuestas económicas de la Coparmex son fieles al principio de defensa de los derechos de la propiedad. Reclama garantías de certeza jurídica para los propietarios del capital, como elemento central del marco jurídico e institucional del crecimiento. Pero no se plantea lo mismo para los trabajadores que, en su visión económica, se funden en el conjunto de los agentes económicos privados. Las alusiones al marco legal que rige las relaciones laborales son prácticamente inexistentes en las propuestas económicas 2000-2010.

Fiel a su doctrina de ignorar a los trabajadores como parte central del proceso productivo, relega la reforma laboral al limitado ámbito de las políticas de competitividad. Y todo se resume en un

solo concepto: "Adecuar el marco legal para impulsar la Nueva Cultura Laboral entre empresarios y trabajadores con el fin de lograr un incremento continuo de la productividad de todos los factores de la producción".

Para Coparmex la llamada "Nueva Cultura Laboral" no requiere de explicaciones en el documento, a pesar de la pretensión ambiciosa de que la legislación se adecue a ella. Si nos atenemos al documento concluiremos que la realidad sindical resulta satisfactoria a esta visión de la derecha. Y no es de extrañarse, porque la fórmula de esa "nueva cultura", bajo la apariencia de una vocación de modernidad encubre realmente una vieja pretensión de la derecha católica: reducir a la empresa a una comunidad aislada, conducida con visión paternal por un empresario benévolo. La fórmula para lograrlo ha sido un pacto político con el corporativismo sindical.

Así, desde los pactos de contención salarial de mediados de los años ochenta hasta la fecha, la derecha empresarial, llevando como bandera el cambio estructural, ha dado carta de legitimidad —y trato de señores— a un cortejo numeroso de dirigentes sindicales cuya presencia pública no deriva de la representación democrática sino de los complejos mecanismos de control político heredados del régimen de partido casi único. La transición democrática no ha pasado aún por el sistema laboral mexicano, ni ha tocado las prácticas viciadas de la justicia laboral, donde los derechos y libertades de los trabajadores son, con extrema frecuencia, letra muerta. Para la Coparmex este tipo de derechos no tiene relevancia.

Más "ciudadanos", menos "políticos"

En su capítulo de reforma del Estado, la Coparmex aborda con detalle diversos aspectos de las reformas que considera necesarias en el ámbito de la regulación electoral y del sistema de partidos. Propone la incorporación de las "candidaturas independientes" y la desaparición de los "innecesarios" legisladores de representación proporcional —lo que reduciría la pluralidad parlamentaria en detrimento de las minorías—. Dicha tesis coloca a los partidos o al "excesivo" número de los mismos como traba a la democracia. La Coparmex se sitúa en este terreno en el lugar común que, por ejemplo, describe el Latinobarómetro, en el sentido de que se reivindica a la democracia pero no a sus instrumentos imprescindibles: los partidos políticos y el Parlamento, lo que al final es reflejo de una escasa comprensión de lo que es la democracia como sistema político. Las grandes coordenadas de las propuestas de la derecha empresarial mexicana podrían sintetizarse en: menos intervención del Estado, menos impuestos, menos sindicatos, menos partidos y menos laicismo. n

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1404&id_rubrique=585

Piero Meaglia y Ermanno Vitale

Las derechas

Las derechas —como las izquierdas— conforman un universo complejo. En Europa y América tienen una presencia que nadie en su sano juicio puede omitir. En muchos países —entre ellos el nuestro— logran un respaldo ciudadano que les permite gobernar y ser influyentes en el debate público y en el circuito legislativo. Se trata de expresiones que no se reducen a la política, sino que aparecen en el campo social, intelectual, económico y religioso. No tienen una sola cara ni son inmutables. Se adaptan o no a los nuevos tiempos y despliegan iniciativas en todos los campos.

Las derechas están bien delineadas en el paisaje universal. Forman parte de la pluralidad de opciones que legítimamente viven y conviven en democracia (aunque en algunas se manifiestan pulsiones antidemocráticas). No tiene caso darles la espalda o creer que se pueden exorcisar. Más

bien intentamos en esta entrega iniciar un análisis de los rumbos, las propuestas y el significado del quehacer de las derechas contemporáneas.

Queremos ofrecer una aproximación no sólo a lo que sucede en nuestro país sino ampliar el horizonte a lo que acontece en otras latitudes. Por ello hemos solicitado a Ludolfo Paramio, por un lado, y a Piero Meaglia y Ermanno Vitale, por el otro, sus reflexiones sobre el tema. También le pedimos a especialistas mexicanos (Roberto Blancarte, Luis Emilio Giménez Cacho, Soledad Loaeza, Ciro Murayama y Luis Salazar) diversos acercamientos a nuestras derechas.

Julio Labastida Martín del Campo
América Latina: La democracia en tensión

El mapa politizado de América Latina comprende a países en procesos de consolidación, así como democracias que pueden experimentar retrocesos.

Después de la euforia de la etapa de la transición democrática en América Latina, hemos pasado a un periodo de fuertes interrogantes sobre el futuro de la democracia. Al respecto, hay que recordar que en el texto canónico sobre la transición democrática de Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter, aunque se refieren fundamentalmente a la disolución de un régimen autoritario y al establecimiento de una democracia, no excluyen el retorno a viejas o nuevas formas de autoritarismo.*

Sin embargo, la culminación de las transiciones, como fue en el caso de México, abrió la expectativa de pasar de una fase fundamentalmente electoral a un proceso que llevaría a una consolidación democrática.

Algunos de los autores más reconocidos sobre la consolidación como Leonardo Morlino (1996, 2005), Samuel Valenzuela (1992), Juan Linz y Alfred Stepan (1996), Giuseppe Di Palma (1998), Gerardo Munck (2001) y Guillermo O'Donnell (1996) consideran que la consolidación de la democracia se realiza una vez que se legitima entre todos los actores políticos y sociales, y ninguno de ellos pretende desafiar y cuestionar esa legitimidad por medios no democráticos. La democracia se convierte entonces en the only game in town: el único juego en la ciudad, para utilizar la conocida expresión de Juan Linz (1990:29). En términos de Giuseppe Di Palma: "lo democrático es un juego abierto de resultados inciertos que no impone a los jugadores otra expectativa que el hecho de jugar (en este aspecto es clave) la creación de reglas que se han capaces de despejar o convertir en inoperante 'la tentación de jugadores esenciales' de boicotear el juego" (1998:73).

En términos de Adam Przeworski: "en una democracia todas las fuerzas deben luchar repetidamente 'ninguna puede esperar modificar los resultados a posteriori; todos deben someter sus intereses a la competencia y a la incertidumbre'. El Momento crucial 'se sitúa al pasar el umbral a partir del cual nadie podrá intervenir para alterar los resultados del proceso político formal [...] El paso decisivo de la democracia es la transferencia de poder de un conjunto de personas a un conjunto de normas'" (1995:22).

En este sentido, "la democracia está consolidada cuando bajo unas condiciones políticas y económicas dadas, un sistema concreto de instituciones se convierten en único concebible y nadie se plantea la posibilidad de actuar al margen de las instituciones democráticas, cuando los perdedores sólo quieren volver a probar suerte en el marco de las mismas instituciones en cuyo contexto acaban de perder [...]. Acatar los resultados [...] aunque supongan una derrota resulta preferible para las fuerzas democráticas a intentar subvertir la democracia" (1995: 43).

Déficit social y débil Estado de derecho

Esta situación de consolidación democrática tal como la acabamos de definir centrada en las instituciones, en los actores y en la aceptación de las reglas de juego democrático y sus resultados no es un fenómeno generalizado en todos los países de América Latina, aun en aquellos que tuvieron una transición o incluso una continuidad democrática. Más bien tenemos un mapa político diferenciado que comprende a países que están en un proceso de consolidación junto al lado de democracias donde predomina su carácter electoral que derivaron en nuevas formas de autoritarismo y otras democracias que están en diferentes grados de tensión en su definición de carácter futuro de su forma de gobierno.

Además de la tensión que acabamos de referirnos de la aceptación de las reglas democráticas y su legitimación, hay otras dos dimensiones que son factores de tensión para el futuro de la consolidación democrática de América Latina: el déficit social y el debilitamiento del Estado de derecho. En los casos de los dos últimos tipos de tensión que mencionamos son procesos de largo alcance en el tiempo, en cambio, los desajustes al marco institucional y su aceptación por los actores políticos que pueden llegar al desconocimiento de las reglas del juego democrático tienen un carácter más coyuntural porque los desenlaces tienden a producirse en plazo relativamente más corto.

Cuando hablamos de déficit social de la democracia en América Latina queremos referirnos a la falta de un crecimiento económico sostenido que se traduzca en políticas públicas que respondan a las necesidades, demandas y expectativas de la población en términos de empleo, educación, salud, vivienda, etcétera, y que permitan procesos permanentes y progresivos de inclusión, integración y movilidad social. Siguiendo a Morlino, esta "capacidad de respuesta satisfactoria de los gobernantes a las demandas de los gobernados" se puede traducir en una mayor satisfacción y legitimidad para las instituciones democráticas, con lo cual la consolidación es prácticamente alcanzada. En cambio, el incumplimiento de éstas se traduce en un mayor distanciamiento con los partidos políticos e incluso un declive de confianza en las instituciones democráticas (2005: 272-273).

En cuanto al otro obstáculo a la consolidación democrática: el debilitamiento del Estado de derecho, nos referimos a lo que Guillermo O'Donnell denomina la ausencia del Estado legal: en el que "las leyes formalmente vigentes son aplicadas (sólo ocasionalmente, y), cuando lo son, de modo intermitente y diferencial. Lo que es más importante, esta ley segmentada está sumergida en la ley informal decretada por los poderes privatizados (fácticos) que de hecho gobiernan esos sitios... Se trata de sistemas subnacionales de poder que [...] tienen un base territorial y un sistema legal informal pero bastante efectivo" (2002: 320-321). Un claro ejemplo de estos poderes fácticos o privatizados, como los denomina O'Donnell, es sin duda el narcotráfico y el crimen organizado, cuya capacidad para competir por el monopolio legítimo de la violencia en determinados espacios, imponiendo sus leyes mediante la generación de mecanismos de coerción sobre las fuerzas policíacas, miembros del poder judicial (corrupción), generación del miedo en la población (ejecuciones) y una constante violación de los derechos humanos. Lo que los constituyen en actores que atentan contra la consolidación de la democracia.

Mapa político de América Latina

Creemos que las tensiones y desafíos que enfrenta la consolidación democrática en América Latina nos permiten hacer, de forma sintética, un mapa político de la región:

1. Hay países que están experimentando un proceso de consolidación democrática y que han sido capaces de ir eliminando progresivamente las herencias del periodo autoritario, como Chile y Uruguay. Otros, como en el caso de Costa Rica, mantienen la continuidad democrática, a pesar de que han ido perdiendo su capacidad de integrar a la población, que han aumentado su déficit social.

2. En el caso de Argentina es especial en cuanto más que avanzar hacia la consolidación vive una tensión entre la democracia liberal y la restauración progresiva de una democracia que O'Donnell llama delegativa, en donde el ejecutivo supedita a los otros poderes.

3. Venezuela sería un caso en que manteniendo los mecanismos electorales se ha pasado de una dictadura populista con una gran concentración de poder en un caudillo carismático que logra una amplia movilización y aceptación de una parte de la población a través de un discurso de fuerte integración simbólica con un carácter nacional y popular, así como con políticas sociales existencialistas acompañadas de amplia distribución de recursos. Esta forma de gobierno populista es, por lo tanto, incluyente, pero desborda las reglas e instituciones de la democracia y excluye y vulnera los derechos de sectores importantes de la población, en particular de las elites y las clases medias. Un aspecto importante que no se puede desestimar es que el presidente Hugo Chávez ha contado con amplios recursos generados por el alza a nivel mundial de los precios del petróleo. Una disminución drástica de estos recursos puede tener fuertes implicaciones políticas para la revolución bolivariana.

4. En el grupo de más alta tensión en relación a sus perspectivas de consolidación democrática se encuentran Bolivia y Ecuador. En ambos países existe un alto porcentaje de población indígena y grandes desigualdades económicas, sociales y culturales, así como regionales. La democracia de tipo liberal enfrenta profundos desafíos frente a la afirmación de identidades culturales y reivindicaciones nacionalista. En el caso de Bolivia, la tensión y el conflicto está en los límites de la desintegración territorial de lo que es hoy el Estado boliviano. En el caso de Ecuador se está viviendo una fuerte polarización, movilización social y un enfrentamiento entre poderes, tanto a nivel político como económico.

5. En América Central hay diferentes grados de precariedad respecto de una democracia de calidad y consolidación. El caso Costa Rica, al que ya nos referimos, es una excepción. En Nicaragua el triunfo del Frente Sandinista ha hecho que el país se mueva entre la democracia y un populismo más orientado hacia el exterior, fundamentalmente buscando los apoyos económicos de Venezuela. Sin embargo, la vuelta del FSLN en unas elecciones sin mayores dificultades se caracteriza por un predominio del pragmatismo tanto en la política interna como externa. En Guatemala la presencia política del ejército y la violencia de los grupos paramilitares desafían a una débil democracia donde la mayoría de la población, que es indígena, continúa marginada y oprimida. Honduras es una democracia electoral que no supera sus condiciones de pobreza. En cuanto a El Salvador, a pesar de los equilibrios entre los gobiernos de derecha y la oposición de izquierda, ha surgido un tipo de violencia generado por la marginación social: la de las bandas juveniles marasalvatrucha que a su vez han provocado violentas reacciones de grupos paramilitares y políticas de exterminio. El fenómeno de los marasalvatrucha se ha extendido a toda América Central y ha penetrado hasta México. En síntesis, en América Central persisten muchas carencias endémicas. Superadas las dictaduras militares y la guerra civil perduran las graves desigualdades sociales al lado de las viejas formas de violencia, como de las bandas juveniles y los grupos paramilitares que los combaten y aquellas vinculadas con el incremento

del narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas. En este contexto, estamos ante democracia débil y, por tanto, vulnerable.

6. En el Caribe el caso más paradigmático por su gravedad es el de Haití, "una democracia" tutelada por la ONU donde la profundidad de la crisis social la hacen aparecer como inviable, lo mismo que a cualquier gobierno que pueda asegurar su permanencia y sobre todo la seguridad, garantías civiles y la protección de los derechos humanos y un bienestar mínimo para la población.

7. En relación a Brasil y México es preciso seguir la reciente afirmación de Guillermo O'Donnell en una entrevista reciente en el suplemento "Enfoque" del periódico Reforma: estos países no se pueden asimilar al caso de Venezuela, ni mucho menos de Bolivia y Ecuador, pues ambos países tienen una mayor complejidad social con una diversificación de poderes que van construyendo un soporte institucional y con una inserción internacional mucho mayor. Por las razones anteriores, a pesar de su gran desigualdad social y regional, Brasil prosigue por un camino democrático y, a diferencia de México, está teniendo un mayor éxito en su estrategia tanto de desarrollo como de inserción en el contexto económico internacional; como lo muestra su política educativa, científica y tecnológica y su activa política exterior tanto en su impulso al Mercosur como en la multiplicación de sus relaciones económicas internacionales y su creciente presencia diplomática a nivel mundial.

En el caso de México, a diferencia de Brasil, se presenta un rezago del crecimiento económico y la falta de una nueva estrategia de desarrollo que retome el crecimiento sostenido y permita renovar las políticas públicas, particularmente educativas, científicas y tecnológicas, así como asegurar el crecimiento del empleo.

Además, hemos perdido liderazgo y presencia internacional. Al igual que Brasil, México tiene un Estado de derecho a la defensiva frente a un creciente avance del narcotráfico y el crimen organizado. Además, México no acaba de superar las secuelas del conflicto postelectoral de 2006. Ese conflicto mostró tensiones en el marco institucional y de la vinculación de éste con los actores políticos y sociales que desempeñaron un papel significativo en el proceso electoral; al grado que hemos estado en los límites de la ruptura del marco institucional y legal.

De cara a lo anterior, propongo una agenda mínima para México:

Procesos electorales. Para evitar que se repitan los errores que llevaron al conflicto postelectoral de 2006 es necesaria una reforma de algunos aspectos de los procedimientos electorales; control del financiamiento, que las campañas sean más cortas y menos costosas, regular de forma equitativa el acceso a los medios, pero sobre todo romper con la comercialización del proceso electoral. Asimismo, mejorar las normas para asegurar una utilización de los recursos transparente y auditada. En México se ha puesto todo el acento en el fortalecimiento financiero de los partidos. Una lección de las elecciones de 2006 es que resulta importante regular de manera más estricta el carácter y alcances del poder ejecutivo y de grupos de poder económico y otros actores sociales en las campañas, así como acotar el papel de los medios de comunicación. Además, es necesario que se obligue a los partidos y candidatos a presentar verdaderos programas políticos donde haya un auténtico debate y discusión en lugar del millón de comerciales en radio y televisión a los que se refiere Gabriel Zaid (2007).

Partidos políticos. En cierta medida, se puede afirmar que los tres partidos más fuertes han heredado una situación de privilegio respecto del acaparamiento de grandes recursos públicos para negociar con las fuerzas externas y controlar a sus miembros. Como señala Jean François

Prud Homme, estamos en México en un caso de control oligopólico de la representación política de los partidos más fuertes que, por su condición privilegiada, dificulta una verdadera competencia de los partidos pequeños. Por lo que se deben dar más facilidades para la formación y fortalecimiento de nuevos partidos para que contribuyan a la renovación de la clase política. También es necesario democratizar los partidos al interior, empezando por sus estatutos y sus formas de organización, debe haber un control externo y de sanciones de las autoridades electorales si no se produce. Además, como señala Gabriel Zaid, los debates deben empezar por los precandidatos de cada partido cuya designación no sólo debe nacer en las cúpulas, aunque la decisión corresponda en exclusiva a los afiliados.

Relación de partidos políticos y ciudadanos. El problema fundamental de la consolidación de la democracia en México está en su sistema de partidos y su relación con sus ciudadanos. Los ciudadanos van adelante de la clase política, eso explica el voto diversificado que se ha traducido en gobiernos divididos, ya que no quieren una vuelta a una concentración de poderes, de ahí que una constante haya sido, desde que terminó la transición democrática, los gobiernos divididos. Aunque la participación electoral ha mantenido niveles altos, al mismo tiempo hay un desencanto de los ciudadanos con los partidos y la clase política. Por lo tanto, es importante que se permita la reelección del poder legislativo, que facilitaría una relación y una obligación de rendición de cuentas con los ciudadanos, y los candidatos dejaran de ser cautivos de las cúpulas partidistas. Las candidaturas ciudadanas son un derecho de los ciudadanos a pesar de las objeciones que han encontrado por ser candidatos improvisados sin suficiente profesionalismo político y una base social inestable. En cuanto a las candidaturas es ideal, como señala O'Donnell, que los partidos sean fuertes y tengan una gran inserción social para el buen funcionamiento de la democracia, pero en México los partidos no tienen una gran inserción social y muchas veces los ciudadanos o desconocen o rechazan a los candidatos que proponen los partidos, lo que no ha dejado de tener altos costos como lo muestra el caso del PRI en 2006 con la candidatura de Madrazo.

Organizaciones ciudadanas. A pesar de que la legislación electoral se centra en el fortalecimiento de los partidos, las organizaciones ciudadanas deberían tener un espacio más importante en los procesos electorales, monitoreando y exigiendo a los partidos rendición de cuentas; en Canadá y Estados Unidos ha habido etapas en que las organizaciones de ciudadanos han tenido una función de monitoreo de los partidos políticos y han jugado un papel importante en el último país en circunstancias políticas como el Watergate.

Bibliografía

Di Palma, Giuseppe, "La consolidación democrática: una visión minimalista", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núm. 35, abril-junio, 1988, pp. 67-92.

Entrevista a Guillermo O'Donnell, "México: democracia en construcción", en suplemento *Enfoque (Reforma)*, 22 de noviembre, 2007.

Linz, Juan J. y Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996, 479 pp.

Morlino, Leonardo, "Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, núm. 35, julio-septiembre, 1986, pp. 7-61.

Morlino, Leonardo, *Democracias y democratizaciones*, Cepcom, México, 2005.

Munck, Gerardo L., "Democratic Consolidation", en Paul Barry Clarke y Joe Foweraker (eds.), *Encyclopedia of Democratic Thought*, Routledge, Londres, 2001, pp. 175-177.

O'Donnell, Guillermo, "Ilusiones democráticas", *Etcétera*, núm. 183, 1 de agosto, 1996, pp. 14-21.

O'Donnell, Guillermo, "Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales: Una perspectiva latinoamericana con referencia a países postcomunistas", en Carbonell, Miguel, Wiscano Orozco y Rodolfo Vázquez (coords.), *Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización de América Latina, Siglo XXI*, México, 2002.

O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter (coords.), *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Paidós, Buenos Aires, 1988, vol. IV, p. 20.

Przeworski, Adam, *Democracia y mercado: Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*, Cambridge University Press, Gran Bretaña, 356 pp.

Valenzuela, J. Samuel, "Democratic Consolidation in Post-Transitional Settings: Notion, Process, and Facilitating Conditions", en Scott Mainwaring et al. (eds.), *Issues in Democratic Consolidation: the New South American Democracies in Comparative Perspective*, University of Notre Dame, Notre Dame, 1992, pp. 57-104.

Zaid, Gabriel, "Después del susto", *Reforma*, México, 29 de abril, 2007. n

Ponencia presentada en el coloquio Consolidación a la democracia: dimensiones e indicadores, que se realizó los días 3 y 4 de mayo en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

* Entienden por transición democrática "el intervalo que se extiende de un régimen político a otro (...) Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas. No sólo se hallan en flujo permanente sino que, además, por lo general son objeto de una ardua contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores" (*Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Buenos Aires, Paidós, 1988, vol. IV, p. 20).

http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=1379&id_rubrique=567